

Carlos M. Vilas

**El impacto de la transición revolucionaria
en las clases populares:
la clase obrera en la revolución sandinista**

Este artículo analiza algunos aspectos del impacto de la Revolución Sandinista en las clases populares que constituyen su soporte principal, centrandlo el enfoque sobre la clase obrera. La mayor parte de los estudios sobre los procesos revolucionarios tiende a enfocar el modo en que las viejas clases dominantes son afectadas por las políticas del régimen revolucionario. En cambio, no es mucho lo que se sabe sobre las modificaciones que se introducen, durante el periodo de transición, en la situación de las fuerzas populares: tanto en lo que se refiere a su magnitud sociodemográfica como a sus orientaciones reivindicativas, sus niveles y modalidades de organización, las estrategias para impulsar sus demandas, etcétera. El artículo busca por lo tanto aportar elementos para la comprensión del tema, en lo que se refiere a la Revolución Sandinista en Nicaragua.

Hablar de transición con relación al proceso revolucionario en Nicaragua obliga a formular algunas aclaraciones. El vocablo es usado en general para referirse a procesos de transformación encaminados hacia el socialismo; su contenido es, por lo tanto, eminentemente anticapitalista. Sería difícil afirmar que la Revolución Sandinista es (en su etapa actual) anticapitalista. El autor ha señalado, en trabajos anteriores, que se está más bien en presencia de una revolución antioligárquica, antimperialista, de liberación nacional, cuyas metas principales son la afirmación de la soberanía nacional, el desarrollo de las fuerzas productivas y el mejoramiento del nivel de vida de las grandes mayorías populares, en el marco de una estrategia de economía mixta, coexistencia de clases y participación popular. Se trata, fundamentalmente, de una *transición desde él subdesarrollo*, hacia niveles de mayor justicia, bienestar social, desarrollo y autodeterminación nacional, en un enmarcamiento nacional y popular, más que proletario y socialista. Ello ubica la cuestión de su impacto en las clases populares en términos y con alcances distintos que si se tratara de analizar una revolución socialista.

El artículo analiza el impacto sobre las clases populares en general, y en particular sobre la clase obrera. La cuestión del campesinado y del sector informal urbano quedan, por el momento, fuera de nuestro enfoque, aunque algunas consideraciones indirectas, han resultado inevitables aquí.

1. LAS CLASES POPULARES EN EL MOMENTO DEL TRIUNFO SANDINISTA

A fines de la década de 1970 Nicaragua presentaba un proceso de urbanización mucho más desarrollado en el aspecto demográfico y residencial que en el aspecto económico. Casi 50% de la población total vivía en centros urbanos pero casi 80% de la producción material era generado por las actividades agropecuarias. Nicaragua podía ser considerada en términos económicos, una sociedad agraria, pero no en términos demográficos, y en este último sentido contrasta marcadamente con otras sociedades primarioexportadoras del Tercer Mundo; por ejemplo, con Bolivia en la época de la revolución del MNR, con Argelia durante la lucha del FLN, o con los países de la “línea del Frente” en África. El contraste existe incluso con el resto de América Central, excepto Costa Rica: a fines de la década de 1970 menos de 43% de la PEA de Nicaragua se hallaba en la agricultura, mientras en El Salvador 50%, en Guatemala 55% y en Honduras casi 63%.

Al mismo tiempo, el capitalismo agroexportador generó en Nicaragua una estructura de clases compleja, con un proceso de proletarización desigualmente desarrollado: más amplio en el campo que en las ciudades, más extendido en la agroexportación que en la producción rural para el mercado interno y, en el primer caso, con un empleo sujeto a fuertes oscilaciones estacionales. En vísperas del triunfo revolucionario la estructura de clases en el campo presentaba como elemento predominante una amplia masa de campesinos pobres, sin tierra suficiente para hacer frente a la reproducción de la unidad familiar, forzada a la venta estacional de su fuerza de trabajo en las actividades de exportación; aproximadamente 40% de la PEA rural (unas 165 mil personas) correspondía a esta categoría, de acuerdo a nuestras propias estimaciones. Junto a ellos, existía un proletariado rural, sobre todo en la agroexportación, que representaba casi 30% de la PEA rural (unas 125 mil personas). Vale decir que casi 70% de la PEA correspondía a proletariado y campesinos pobres. El resto estaba compuesto de campesinos medios y ricos, y una muy exigua

burguesía agraria. A pesar de representar alrededor de 20% de la PEA rural, el campesinado mediano y grande generaba casi la mitad de la producción agropecuaria y contaba con más de la mitad de la tierra en explotación (Vilas 1986a: 60 y ss.).

En las ciudades el proletariado de los sectores productivos y servicios básicos sumaba en la misma época unos 130 mil trabajadores, o 20% de la PEA urbana; sin embargo, menos de la mitad de esta cifra correspondía al proletariado industrial. La reducida generación de empleo por el tipo de industrialización que se desarrolló desde la década de 1960 en el marco del Mercado Común Centroamericano derivó hacia el autoempleo, el artesanado, el pequeño comercio y los servicios personales, a una proporción grande de la PEA urbana y de las nuevas camadas de fuerza de trabajo urbanas y urbanizadas. A principios de la década de 1970 casi 70% de la PEA del sector industrial eran artesanos, y sólo 6% obreros propiamente tales, si bien la escasa información disponible revela el desarrollo de un proceso relativamente acelerado de deterioro y proletarización de la producción artesanal. Casi 50% de la PEA de Managua correspondía en vísperas del triunfo revolucionario al sector informal urbano (SIU). Considerando que la gran mayoría de las plantas industriales se radicó en Managua y su zona de influencia inmediata, es plausible suponer que en las demás ciudades la importancia relativa del SIU era mayor aún.

En el sector industrial la relevancia de la mediana producción era mucho más reducida que en el campo. Tempranamente se alcanzaron fuertes niveles de centralización y concentración del capital, la producción y la fuerza de trabajo. En 1979, 75% del empleo y 86% del valor agregado correspondía a los establecimientos industriales más grandes (17% del total) (INEC 1981).

Este perfil sociodemográfico y ocupacional se reprodujo en el seno del movimiento revolucionario, expresándose en el fuerte peso de estos grupos intermedios en la insurrección urbana. Desde esta perspectiva, la Revolución Sandinista es una revolución popular más que obrera; de los pobres más que de los proletarios. El FSLN fue más fuerte en los barrios que en las fábricas, en los ámbitos de reproducción que en los centros de producción. Pero al mismo tiempo, la participación de los obreros en la insurrección fue mayor que en la estructura ocupacional; en un trabajo anterior hemos señalado que los obreros no fueron mayoría en la insurrección, pero hubo proporcionalmente más obreros en la producción de la sociedad nueva (la insurrección) que en la reproducción de la sociedad vieja (la economía). En esto influyeron elementos que hemos analizado en otro lugar (Vilas 1986a: cap. III).

Ahora bien: este perfil urbano es el que emerge de la insurrección. Cuando se presta atención al

periodo anterior, los participantes adquieren una fisonomía más rural; aunque también se incrementa el peso de los estudiantes. La revolución sandinista siguió una evolución desde el foco inicial, pasando por una etapa de guerrilla rural, a insurrección urbana final. Pero nunca hubo una guerrilla campesina del tipo China, o Argelia, Angola y Mozambique o Vietnam, o El Salvador y de alguna manera Guatemala, con zonas liberadas, organización de la vida civil, desarrollo de sistemas de producción, etcétera. La montaña fue “el crisol donde se forjaron los mejores cuadros” (Comandante Ruiz 1980) pero los golpes decisivos fueron ejecutados en las ciudades. Esto fue así tanto en términos de propaganda armada y de desprestigio del régimen — por ejemplo los operativos contra la residencia de “Chema” Castillo (diciembre de 1974) y contra el Palacio Nacional (agosto de 1978), o las acciones de octubre de 1977— como en las insurrecciones desde Monimbó (febrero de 1978) en adelante. Es que, además de la urbanización demográfica, también el poder político estaba urbanizado en Nicaragua.

2. CLASES POPULARES Y POLÍTICAS ESTATALES: FACTORES QUE INTERVIENEN

Varios elementos han intervenido en la configuración de las políticas del Estado revolucionario hacia las clases populares. Muy esquemáticamente podemos reducirlos a cuatro principales: a] el modo en que el FSLN y el gobierno revolucionario han conceptualizado en su diseño político a algunas fracciones y sectores de estas clases; b] el desarrollo desigual, ya señalado, del proceso de urbanización; c] la adopción de una estrategia de economía mixta en la cual el Estado asume el papel de eje dinámico de la acumulación; d] las presiones y tensiones externas: en primer lugar, el desenvolvimiento de la guerra contrarrevolucionaria impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a presentarlos rápidamente.

a] Conceptualización de algunos segmentos de las clases populares

Toda política estatal dirigida a grupos sociales determinados conlleva, explícita o implícitamente, una conceptualización de dichos grupos: quiénes son, qué posición ocupan en la estructura social, cuáles son sus reivindicaciones, intereses y demandas. En los procesos revolucionarios del Tercer Mundo es frecuente que se suscite algún tipo de debate respecto de quién es quién en la estructura

social, cuáles son los rasgos objetivos que definen a grupos sociales determinados y a partir de los cuales es posible inferir intereses específicos (cf. para el caso cubano Mintz 1974). En Nicaragua la cuestión se ha referido básicamente a grupos “intermedios” en la polarización capitalista de las clases sociales, o bien que definen su identidad por criterios que no emanan fundamentalmente, o exclusivamente, de la esfera de la producción material: 1] el campesinado pobre y los trabajadores sin tierra; 2] el sector informal urbano; c] los indígenas de la región atlántica.

Sobre todo en los momentos finales del proceso insurreccional, y al principio de la gestión del gobierno revolucionario, hubo tendencia a tratar a todo el mundo como parte del proletariado. De alguna manera la revolución llegaba en el momento en que estos grupos aún no habían culminado su proceso de proletarización; no eran (¿todavía?) proletariado, pero habían perdido (¿ya?) relación significativa con un fondo de reproducción. Dado que se trata de una revolución popular y antimperialista, era fácil concluir que el desarrollo previsible de estos grupos no podía ser sino hacia un horizonte de clase obrera. De alguna manera, eran algo así como proletarios en germen.

Diversos factores parecen haber intervenido para generar este tipo de interpretación. En el caso del campesinado pobre, el enfoque privilegió la venta estacional de fuerza de trabajo en la agroexportación, o en servicios personales urbanos o semiurbanos. El salario obtenido por la vía del empleo estacional se consideró fundamental para la reproducción de la unidad familiar. La función de la parcela, cuando ella existe, no sería otra que mantener “atado” al trabajador hasta la siguiente cosecha, relevando al capitalista de los gastos de manutención durante el tiempo muerto; sería, para recurrir a la expresión de Lenin, una forma de “salario en especie” (Lenin 1974). Consiguientemente, el campesino pobre debía ser caracterizado como un semiproletario.

En el caso del sector informal urbano, su inclusión en el proletariado fue posible por la caracterización de la clase obrera como el conjunto de los pobres: trabajadores manuales, gentes de mil oficios, carentes de empleo e ingresos estables, sin un lugar bajo el sol. Esta concepción estuvo muy extendida en el Frente Sandinista y en la cultura política marxista de la Nicaragua prerrevolucionaria y de los años iniciales de la revolución. Expresaba, sin dudas, el tipo de desarrollo capitalista y de urbanización desarrollados a partir de la segunda guerra mundial, pero también reflejaba la participación de las masas empobrecidas de las ciudades en la insurrección final (cf. Vilas 1986a: 101 y ss.).

Finalmente, en lo que toca a los indios, el desconocimiento generalizado de la cuestión étnica

llevó a privilegiar la dimensión material de estas poblaciones: agricultores empobrecidos, trabajadores de las minas y de las compañías forestales, esquilados por el capital extranjero y por los comerciantes. Se enfocó exclusivamente su dimensión de productores, soslayando elementos culturales específicos que los diferenciaban de los pobres de otras identidades étnicas. El enfoque inicial de la revolución, por un lado puso énfasis en el pago de salarios a la fuerza de trabajo indígena y en su extrema pobreza; por el otro, interpretó algunas prácticas de cooperación productivas como el “pana-pana” (especie de mano vuelta), o algunas características de la vida comunal —por ejemplo, la casi absoluta inexistencia de transmisión hereditaria de bienes, o formas de distribución de los productos de la actividad económica entre todos los miembros de la aldea—, como supervivencias de modalidades de comunismo primitivo.

Resultado de este enfoque fueron decisiones de política orientadas a acelerar o consolidar el desarrollo de estos grupos y fracciones hacia el proletariado. Así, en materia organizativa, tanto el campesinado pobre como los agricultores indígenas fueron organizados en la Asociación de Trabajadores del Campo junto al proletariado rural. Se promovió asimismo la organización cooperativa, apoyada supuestamente en los elementos de cultura colectiva que se asumían en estos grupos, y como forma de potenciarlos. El campesinado pobre consiguió tiempo después su propia expresión organizativa, pero el caso de los indígenas fue mucho más complejo. En cuanto al sector informal, los intentos de introducir alguna forma de organización fracasaron, aunque una porción relativamente importante de la gente que se desenvuelve en él se integró al principio en los Comités de Defensa Sandinista (CDS).

Es interesante señalar que al mismo tiempo que esta visión informaba el modo predominante en que el Estado revolucionario se dirigía a estas fracciones, en algunos ámbitos técnicos del mismo se generaba una óptica diferente, opuesta incluso. Es decir, en el campo, se veía fundamentalmente la existencia de una amplia masa campesina, con aportes sustanciales en materia de producción, incluso en rubros de agroexportación (cf. por ejemplo Baumeister 1985), e incluso un proletariado agrícola casi inexistente (Deere y Marchetti 1981). En este segundo caso, se veía en el campesino sin tierra un “subproletariado” que, con todas sus limitaciones, vivía fundamentalmente de la explotación de una parcela de tierra; el salario estacional en la agroexportación sería apenas un complemento de los ingresos generados por el trabajo en la parcela. Se llegó a afirmar, incluso, la casi inexistencia de una clase obrera en Nicaragua.

Simplificando mucho, podemos decir que, entre otras cosas, la primera visión llevó a postergar

la demanda de tierra por “pequeñoburguesa”, ineficiente, retardataria. La segunda visión, en cambio, llevó a soslayar la cuestión de los salarios. Es decir, según cómo se enfocó a estos grupos, fue el arco de intereses que se infirió en ellos o, incluso, que se les imputó. En el mejor estilo sandinista, las posiciones polares se fusionaron finalmente en medidas de política que trataron de articular los elementos más positivos de ambas, aunque en circunstancias concretas, o en periodos determinados, unas u otras tendieron a prevalecer (Vilas 1984).

b) Desarrollo desigual del proceso de urbanización

A veces se dice que la Revolución Sandinista es una revolución urbana en un país rural. La frase se refiere a que muchas de las políticas de la revolución, sobre todo aquellas que tienen que ver con la elevación de los niveles de vida de las clases populares, se orientaron más hacia las ciudades que hacia el campo. En consecuencia, los principales beneficiarios de estas políticas no habrían sido los trabajadores —que constituyen una minoría en el universo poblacional urbano—, sino el sector informal, la pequeña burguesía asalariada, las clases medias.

La cuestión, por supuesto, es más compleja y matizada. Las políticas estructurales del gobierno revolucionario, encaminadas a una transformación socioeconómica profunda, tienen como ámbito fundamental el campo. Los grandes proyectos de acumulación, dirigidos a la transformación de las relaciones de producción y al desarrollo de las fuerzas productivas, se orientan hacia el campo y se sitúan en él: reforma agraria, proyectos de desarrollo agroexportador, y otros. Lo mismo debe decirse de los grandes logros de la Revolución Sandinista en materia de desarrollo social, como la alfabetización, la educación popular de adultos, la masificación de los servicios de salud.

Pero al mismo tiempo las políticas de beneficio inmediato, o algunas de ellas, generaron efectos que fueron apropiados en mejores condiciones por la gente de las ciudades, aunque el costo de esas políticas recayera sobre todos, incluyendo por supuesto a la gente del campo. Es indudable que la vida urbana generó condiciones mejores para captar los beneficios de las políticas sociales, si bien, como se verá, el énfasis estuvo dirigido sobre todo hacia el campo. Y, complementariamente, cuando la crisis económica y otras limitantes se hicieron sentir, existieron en las ciudades más alternativas para adaptarse a la nueva situación.

Quizás el caso más notorio es el de la política de subsidios al consumo, que se desarrolló desde

el inicio de la gestión del gobierno revolucionario hasta las medidas de ajuste de principios de 1985 (aunque unos pocos subsidios se han mantenido). Los subsidios fueron establecidos como forma de sortear las contradicciones que emanaban de la necesidad de garantizar simultáneamente los ingresos campesinos y los de los consumidores. Sin embargo, la mayor atención a la situación de ingresos de las masas urbanas en el marco de un proceso inflacionario de creciente magnitud, se tradujo en un deterioro de los precios reales agropecuarios y en la caída de los ingresos campesinos, mientras que los precios al consumidor se mantenían congelados.

Del mismo modo, las prohibiciones a las ocupaciones de tierras por campesinos carentes de ellas, contrastaron con la permisividad urbana respecto de las ocupaciones de terrenos urbanos para establecer asentamientos espontáneos, a los que rápidamente se dotó de los servicios básicos e incluso de una mínima infraestructura. Al mismo tiempo que una rama del Estado desalentaba las acciones directas de los agricultores sin tierra, otras ramas de ese mismo Estado acudían raudas a dotar de materiales de construcción, conexiones de agua corriente y luz eléctrica, etcétera, a los invasores de terrenos en las ciudades.

No es la primera vez que algo así ocurre en una revolución social en sociedades agrarias. La capacidad de presión de la gente es generalmente mayor en las ciudades; están más próximos unos de otros, el nivel y la frecuencia de sus interacciones suele ser mayor. Están también más cerca del asiento físico del poder estatal, por eso los gobiernos siempre están atentos al estado de opinión de los sectores populares urbanos. Asimismo los cuadros técnicos y profesionales, que suelen ser muy escasos, viven en las ciudades, y se considera importante adoptar medidas que de alguna manera contribuyan a mantener sus condiciones de vida. De ahí que, por ejemplo, no sea desusado encontrar que el deterioro del transporte público va de la mano con la importación subsidiada de automóviles para uso privado.

En el caso de Nicaragua hay además, o principalmente, otro factor: el carácter decisivo de la insurrección urbana para derrocar a la dictadura. La economía es agraria, pero más de la mitad de su población no lo es, y tampoco lo fue el teatro de operaciones de la etapa más relevante de la revolución. La gente del pueblo se decide a meterse en un movimiento revolucionario porque confía en que con la revolución va a vivir mejor; una manera de convencerse que vive mejor es con resultados tangibles. Las inversiones en el desarrollo urbano de los barrios populares de Managua, León, Masaya, etcétera, marginaron sin duda a los pobladores del campo, y posiblemente estimularon de manera indirecta la migración hacia las ciudades, pero difícilmente

se las podría evaluar como excesivas, extravagantes o extemporáneas.

c] Estrategia de economía mixta con el Estado como eje dinámico de la acumulación

La base social de la revolución es una alianza amplia que incluye no sólo a la clase obrera, al campesinado y a los estratos pobres del campo y la ciudad, sino también a las capas medias y a los sectores patrióticos de la burguesía. Este esquema multclasista, que el discurso político sandinista denomina de unidad nacional, es el correlato de la estrategia de economía mixta, y tiene varias implicaciones sobre el tema que estamos discutiendo.

En primer lugar, significa que las relaciones que se tejen entre el régimen revolucionario y las clases populares —independientemente o adicionalmente a las diferenciaciones y contradicciones que se registran dentro de las clases populares— forman parte de una matriz más compleja, donde se incluyen las relaciones que el régimen revolucionario quiere mantener con la burguesía y las capas medias, cuyos intereses son, en determinado nivel, contradictorios con los de los obreros y campesinos. Por lo tanto, el ritmo y contenido de las políticas de beneficio popular pueden tener que subordinarse a la necesidad o la voluntad de mantener las alianzas amplias con estos otros sectores, y la hegemonía popular convertirse en una cuestión de última instancia.

En segundo lugar, se plantea la posibilidad de que en torno de cuestiones específicas, la diferenciación en el seno de las clases populares coincida con solidaridades de algunas de éstas con elementos de las clases propietarias. Por ejemplo, una alianza vertical de productores agrarios —campesinos, mediana e incluso gran burguesía agraria— respecto de políticas crediticias, de abastecimiento rural, etcétera, que se enfrenta a reivindicaciones de los consumidores urbanos —entre ellos, el proletariado de las ciudades, la pequeña producción artesanal—, pero sin incluir a los asalariados del campo.

Tercero, el multclasismo puede reproducirse dentro de los aparatos del Estado, del gobierno revolucionario, y del mismo FSLN, introduciendo incoherencias, desfases, contradicciones y tensiones en estos ámbitos y niveles. Sería excesivo imputar las diferencias de opinión existentes dentro del régimen revolucionario a cuestiones de clase, pero es innegable que la preocupación por el Impacto de ciertas políticas de satisfacción de reivindicaciones populares en el comportamiento de los sectores patrióticos de la burguesía, se expresa con más intensidad en algunos ámbitos que en otros. La insistencia en las referencias a la indisciplina laboral sin similar

preocupación por la indisciplina patronal, la asociación mecánica entre demandas de incremento salarial y reforzamiento del curso inflacionario, reflejan en muchos cuadros del Estado e incluso del propio FSLN una visión empresarial de las cosas, y también sin duda la idea de que se puede esperar mucho más de la paciencia de los trabajadores que del patriotismo de los patrones.

Todo esto gravita en el contenido de las políticas y en el ritmo de su implementación. Por ejemplo, puede afirmarse que el freno impuesto por el Estado a las intensas movilizaciones obreras y campesinas de 1981 contra las maniobras de descapitalización de elementos de la burguesía agraria e industrial, está relacionado con la alarma que la actividad popular suscitó en sectores de la burguesía que no estaban descapitalizando, pero que temían por el clima de cuestionamiento ideológico de la propiedad privada que signó a esa coyuntura. Asimismo es posible explicar, por lo menos en parte, la lenta aplicación de la ley de reforma agraria, entre 1981 y 1983, al interés del Estado de no preocupar excesivamente a los elementos de la burguesía agraria que permanecían en el país y que mostraban intención de continuar produciendo de manera más o menos satisfactoria.

Por otra parte, el énfasis puesto en el Estado como agente dinámico del proceso de acumulación llevó a postergar la satisfacción de algunas demandas populares, o a aproximarse a ellas más bien de manera indirecta. Por ejemplo, la pausada distribución de tierras al campesinado hasta 1983 estuvo ligada a la prioridad concedida a la constitución del sector estatal en el campo. Otras veces esta prioridad se articuló con un enfoque empresarial de la economía para desacreditar por ineficientes las modalidades de producción campesinas, o las denominadas tecnologías tradicionales.¹ Esto definió contradicciones entre las estrategias de desarrollo postuladas por los programas de inversión, y estrategias más adaptadas a las características de la sociedad nicaragüense, y postergó la capacidad del Estado de responder a las demandas planteadas por amplios sectores de la población.

d] Presiones y tensiones externas

1 Cf. por ejemplo opiniones como las del entonces viceministro de Desarrollo Agropecuario: “En cuanto al campesinado como unidad productiva que pueda asegurar una dinámica expansiva dentro de las condiciones estructurales existentes en nuestro agro, no es una alternativa viable y más bien debe verse como una entidad a ser transformada. Básicamente debe integrarse al movimiento cooperativo o a formas de producción de productos especiales en condiciones particulares, que seguramente se darán pero no visualizo como importantes”. Cf. Coronel 1984.

La extrema vulnerabilidad de las sociedades del Tercer Mundo a los vaivenes del mercado internacional y a las presiones de las economías que lo controlan es bien conocida. Estas presiones no desaparecen al día siguiente del triunfo revolucionario. Al contrario, suelen incrementarse, ya que los factores internos de vulnerabilidad —extrema especialización productiva y exportadora, gran apertura externa de la economía, dependencia tecnológica y financiera, procedimientos y técnicas atrasadas, etcétera— no se remueven de la noche a la mañana, y sobre ellos operan las maniobras desestabilizadoras del neocolonialismo para incrementar su acción perturbadora. Es usual encontrar, por ejemplo, que los mismos organismos internacionales que brindan asistencia financiera a las más ominosas dictaduras del Tercer Mundo hasta horas antes de su derrocamiento, se niegan a financiar proyectos de desarrollo de los regímenes populares. Además, la oposición norteamericana a los cambios revolucionarios en el Tercer Mundo determina que el enfrentamiento, que es inicialmente político y económico, deriva rápidamente hacia la agresión militar. La experiencia internacional demuestra que la guerra popular de defensa nacional es una etapa insoslayable de las revoluciones sociales en la época del imperialismo.

La guerra contrarrevolucionaria impulsada, financiada y pertrechada por el gobierno de Estados Unidos contra Nicaragua define, por supuesto, restricciones enormes para sus políticas de desarrollo y transformación que se agregan a los efectos del embargo comercial y al bloqueo de fondos en organismos crediticios internacionales. El impacto de la guerra se refiere tanto a la enorme cantidad de recursos que deben destinarse a la defensa nacional —aproximadamente 50% del presupuesto de gastos del gobierno y alrededor de 10% de la PEA—, como a la destrucción de activos, la pérdida de vidas, y el desajuste de la actividad general del país.

Pero al mismo tiempo la guerra creó las condiciones para re definiciones que han significado una mayor compatibilidad entre las políticas del Estado y las bases populares de la revolución. El creciente énfasis en la producción para el mercado interno, la aceleración y ampliación de la satisfacción de las demandas del campesinado y los trabajadores del campo, la preocupación por una administración más eficiente de recursos escasos, etcétera, son modificaciones impuestas en definitiva por el desenvolvimiento del conflicto a partir de 1984. De esta manera, las necesidades de la defensa plantean restricciones muy fuertes de recursos para el desarrollo de las políticas y programas de la revolución, pero al mismo tiempo introducen modificaciones en su contenido que las adaptan mejor al enfoque estratégico del proyecto de transformación revolucionaria. Dar

prioridad a la defensa significa dar prioridad a las zonas donde la guerra se pelea —el campo— y a las clases que aportan los pechos para la defensa —en primer lugar, los campesinos y los obreros del campo.

3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS ESTATALES HACIA LAS CLASES POPULARES

Inmediatamente después del triunfo de julio de 1979, el gobierno revolucionario se lanzó a una activa y amplia política de satisfacción de las demandas populares en materia de bienestar social. Se apoyó para esto, en lo operativo, en una generalizada participación popular, y en lo financiero, en una abundante cooperación externa.

En el terreno de la salud pública por ejemplo, campañas masivas de vacunación permitieron erradicar enfermedades endémicas como la malaria y el dengue, y eliminar casi totalmente la incidencia del sarampión y la poliomielitis. La entusiasta participación popular a través de los CDS permitió encarar jornadas masivas de higiene ambiental. La creación de nuevas estructuras institucionales, como el Ministerio de Bienestar Social, o el fortalecimiento de otras preexistentes, como el Instituto de Seguridad Social, permitieron atender una demanda masiva, históricamente postergada, de servicios sociales (UNICEF-OPS 1984).

Las consultas médicas en todo el país se incrementaron más de 15% entre 1980 y 1984; la participación de Managua se redujo del 44% del total de consultas en el primer año a 32% en el más reciente, lo que pone de relieve un proceso de expansión de los servicios médicos hacia el campo. Algo similar tuvo lugar con la ampliación de los servicios hospitalarios; el número de camas creció en todo el país 10% en ese periodo; la participación de Managua se mantuvo estable en términos absolutos y se redujo en términos relativos de 36% a 32% (Cf. INEC 1984).

Los avances experimentados en materia de educación son bien conocidos. La matrícula de educación primaria aumentó de 411 515 en 1980 a 536 656 en 1983; en 1984 se redujo ligeramente (-0.5%) como efecto de la guerra en las regiones I y V y en la Costa Atlántica. La matrícula de la educación popular de adultos ha sido de un promedio anual de casi 87 mil por año entre 1981 y 1984. En el mismo periodo se construyeron casi dos mil centros escolares (primaria y preprimaria) y el plantel de maestros creció en seis mil (un aumento de 30% en cinco años) (INEC 1984).

Uno de los aspectos más relevantes de esta política fue la amplia participación popular que se generó en torno a ella. El desarrollo de las jornadas populares de salud, la educación popular de adultos, y otras, contribuyeron al fortalecimiento de la organización popular. El acelerado crecimiento de los CDS en estos años está ligado a esta vinculación estrecha entre las políticas sociales del gobierno revolucionario y la participación del pueblo. Fue sin duda una participación operativa, pero con amplias reverberaciones políticas, que puso a la gente en contacto con la posibilidad de discutir y eventualmente cuestionar las decisiones que se tomaban en el Estado, de plantear críticas y formular alternativas. Las jornadas de salud, los colectivos de educación popular, los CDS, se convirtieron en muchos casos —sobre todo en el campo— en ámbitos donde la gente podía discutir, con cierta eficacia operativa, todos los aspectos de las políticas estatales que se relacionaban con sus vidas, y no sólo las cuestiones específicas que motivaban los encuentros.² Algunos estudios pusieron de relieve, asimismo, el desarrollo de una conciencia revolucionaria de clase como resultado de la participación de la gente en estos proyectos de desarrollo social.³

Esta política implicó un gran esfuerzo financiero que fue posible por el acceso a fondos blandos provenientes de la cooperación internacional. Entre 1980 y 1983 entre 11 y 14% del presupuesto de gastos del gobierno se dedicó a gasto social. Pero a partir de 1984, y sobre todo durante 1985, la conjugación de la crisis económica y el incremento de la agresión militar externa crearon una tensión muy fuerte entre la asignación simultánea de fondos a la defensa, al programa de inversiones públicas y al gasto social, que hasta ahora se resolvió por la vía de una reducción drástica de este último. La inversión pública en el sector social, que representó 29% promedio del total en el periodo 1980-82, se redujo a 13% promedio en 1983-85, y a 11% (programado) en 1986.

El manejo del conjunto de instrumentos de política económica se orientó hacia el objetivo de evitar que la crisis golpeará con demasiada dureza a las clases populares. Es difícil evaluar en qué medida las distintas clases y fracciones sintieron el impacto de la recesión y de las restricciones presupuestarios, pero el Cuadro I ofrece una perspectiva indirecta, a través de la evolución del consumo por habitante.

2 Cf. sobre la educación popular Vilas 1983; sobre las jornadas populares de salud, cf. Ripp et al: 1984.

3Cf. Flora et al. 1983, sobre el Impacto de la cruzada nacional de alfabetización.

Cuadro I

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO REAL POR HABITANTE, 1980-1985 (en números índice; 1980 = 100)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Consumo total	100	92	85	82	84	81
a. Público	100	106	122	164	187	195
b. Privado	100	88	76	62	60	55
b.1. Básico	100	100	92	80	77	74
b.2. No básico	100	71	53	36	34	26

FUENTE: INEC y Secretaría de Planificación y Presupuesto.

Fácilmente se advierte que en un contexto de rápida retracción del consumo privado, el consumo básico se ha deteriorado a un ritmo mucho menor que el consumo no básico. Al mismo tiempo, una porción del incremento del consumo público —que no es posible dimensionar aquí— puede interpretarse como un efecto de la política de expansión de los servicios sociales. En la medida en que diferentes tipos de consumo expresan diferentes grupos sociales, es posible plantear la hipótesis que la situación de los grupos de menores ingresos ha sido mejor, y en los años recientes menos mala, que la de los grupos de ingresos mayores.

En general, la política social agresiva de los primeros años fue popular en sentido amplio, vale decir, benefició más a quienes tenían más necesidades. Se buscó, fundamentalmente, saldar los déficits históricos de salud, educación, seguridad social. En la medida en que las mayores carencias se registraban en el ámbito rural, la política social benefició más, en términos relativos, a la gente del campo. Por eso mismo, el impacto de las restricciones presupuestarias a partir de 1984 se ha hecho sentir también más en el campo que en la ciudad. Del mismo modo la reducción absoluta de los servicios a causa de la guerra' afecta mucho más a los habitantes de áreas rurales.

La política estuvo orientada por criterios de justicia social *absoluta*: el derecho a los servicios sociales emana de las carencias de la gente, independientemente, en principio, de su contribución

al producto. Pero existieron tensiones en el diseño de las políticas y en las concepciones de ejecución que en el fondo pueden ser interpretadas como producto de la coexistencia de clases dentro del proyecto revolucionario, que hemos mencionado más arriba. A veces estas tensiones se tradujeron en la implementación de políticas que en los hechos respondían más a las demandas de los sectores medios urbanos que a las necesidades de los trabajadores y al pueblo en general.⁴

La guerra ha tenido un impacto fuerte sobre los programas de desarrollo y atención social. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, a fines de 1985 había forzado el desplazamiento de unas 79 mil personas. Se trata en su casi totalidad de familias campesinas, de manera que la reubicación ha tenido una gravitación muy fuerte sobre su actividad productiva, y ha incidido negativamente en las condiciones generales de abastecimiento del país. Asimismo, este reasentamiento masivo ha presionado sobre la capacidad de respuesta del gobierno revolucionario ante las necesidades más imperiosas de esta gente: nuevas tierras, infra-estructura básica, una mínima dotación de servicios, etcétera.

Al mismo tiempo, la destrucción de activos es muy grande para una economía como la nicaragüense. Por ejemplo, solamente hacia fines de 1984, y circunscribiéndonos a los servicios sociales, los ataques de la contrarrevolución destruyeron once centros rurales de atención infantil; 840 colectivos de educación popular de adultos debieron ser cerrados; 247 miembros de esos colectivos fueron asesinados. Catorce escuelas fueron totalmente destruidas y hubo que cerrar 359. Solamente en 1984 fueron asesinados 98 maestros, y 171 fueron secuestrados. Fueron destruidos 41 puestos de salud, y 49 trabajadores de salud fueron asesinados, secuestrados o heridos (INSSBI1985).

En general los grandes logros de la Revolución Sandinista en el mejoramiento del nivel de vida popular están asociados a esta política social amplia y a la participación en que ella se basó. En

⁴ Señalemos, a título ilustrativo, la creación de pocos y caros Centros de Desarrollo Infantil en las ciudades, con excelente dotación de materiales didácticos, técnicas de estimulación precoz, etcétera, en vez de un programa masivo de guarderías infantiles que respondieran a las necesidades reales de la infancia popular: falta de supervisión familiar, condiciones insatisfactorias de higiene, deambulación callejera, etcétera. La política de control de precios ofrece otro ejemplo similar. A pesar de sus objetivos explícitos, los precios oficiales funcionaron básicamente en beneficio de los sectores medios urbanos y dejaron de lado a la mayoría de los trabajadores y sectores populares en general de las ciudades, y a la gente del campo. Esto se debió básicamente a dos factores: 1] Los controles de precios regían en el sector comercial formal —fundamentalmente supermercados y la línea de tiendas populares creadas por el Ministerio de Comercio Interior—; investigaciones sobre los hábitos de consumo de la población urbana señalan que en general los sectores de ingresos bajos prefieren efectuar sus compras en los mercados tradicionales y en las pequeñas ventas de la vecindad —vale decir, en el amplio comercio informal—, donde los controles de precios no tienen vigencia. 2] La cadena de tiendas populares, además de ser limitada, existe fundamentalmente en las ciudades; en las zonas rurales, además de ser pocas, están en general peor abastecidas. Cf. CIERA 1983.

definitiva la gente se insurrecciona para conseguir estas cosas, que son una forma de ver reconocidas su dignidad y su libertad. La idea de que para que el goce de estos derechos sea efectivo y permanente hay que transformar las relaciones de producción, desarrollar las fuerzas productivas, cambiar la naturaleza del Estado, es más bien el aporte de los intelectuales a los procesos revolucionarios.

4. LA CLASE OBRERA

En esta sección vamos a prestar una atención más específica a la situación de la clase obrera en la revolución popular. Sin perjuicio del papel central que el discurso político sandinista le adjudica en la construcción de la nueva sociedad, resulta indudable que la clase obrera ha sido muy vulnerable a las tensiones y contradicciones del proceso de transición hacia una sociedad distinta. En esta situación inciden sin duda la conjugación de la crisis económica con el esfuerzo de defensa en la guerra contrarrevolucionaria. Pero también es resultado objetivo de la propia configuración de la clase —el carácter reciente e inacabado del proceso de proletarización, el fuerte peso de la economía agraria y, en particular, de la economía campesina— y de las políticas con que el Estado encaró el tratamiento de la cuestión obrera. La exposición se centra en cuatro temas: organización, empleo, salarios y actitud hacia el trabajo. Otras cuestiones relevantes, como las experiencias de participación obrera en la administración de las empresas, y la relación movimiento obrero/FSLN/Estado, han sido tratadas en trabajos anteriores del autor.

Organización

El triunfo revolucionario favoreció un crecimiento rápido de la organización sindical de los trabajadores. Aunque es difícil conseguir cifras exactas, puede estimarse que antes de 1979 el reducido movimiento sindical comprendía a poco más de 27 mil trabajadores, equivalentes a 11-12% del total de asalariados. A mediados de 1983, en cambio había alrededor de 145 mil trabajadores afiliados a sindicatos, con una tasa de sindicalización estimada de 41-43% (Vilas 1986a: 178), y a mediados de 1986 unos 260 mil trabajadores, o 56% del total de asalariados (Stahler-Sholk 1986). Alrededor de 80% de los trabajadores industriales sindicalizados

pertenecen a sindicatos afiliados a la Central Sandinista de Trabajadores (CST), y la casi totalidad de los obreros agrícolas en sindicatos corresponde a la sandinista Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) (Vilas 1985).

El crecimiento de la masa de afiliados y del número de sindicatos fueron acompañados por la generación del sistema de convenios colectivos de trabajo, la ampliación de la cobertura del seguro social, y la introducción de mayor eficiencia en sus prestaciones. El clima de amplia libertad organizativa y de mejoramiento general de las condiciones de trabajo contrastó con la represión imperante durante la dictadura, y dotó de un elevado sentido de eficacia a la actividad sindical que sin duda incidió en el rápido crecimiento del movimiento obrero. El Ministerio del Trabajo desempeñó un papel activo en la supervisión del efectivo cumplimiento de la legislación laboral y de las normas de higiene y seguridad ocupacional, y en el asesoramiento a los sindicatos en materia de convenios colectivos, de derechos laborales y de condiciones de trabajo en general.

El fortalecimiento organizativo de los trabajadores tuvo lugar en el marco de un doble proceso de contradicciones. Por un lado, un rápido ascenso de la lucha de clases, que alcanzó a mediados de 1981 una gran intensidad en torno a la cuestión de las maniobras de descapitalización de la empresa privada. Éste fue posiblemente el momento en que el movimiento obrero, y en primer lugar la CST, adoptó posiciones clasistas —léase anticapitalistas— más explícitas. La descapitalización fue caracterizada como una maniobra de la burguesía en complicidad con el gobierno norteamericano para deteriorar la economía y debilitar a la revolución; el movimiento obrero demandaba la confiscación de los responsables, una legislación más severa, y una institucionalización de la vigilancia obrera sobre el comportamiento efectivo de los empresarios privados. El gobierno revolucionario fue sensible a las demandas del movimiento obrero y, en general, convirtió en leyes de efectiva vigencia la mayoría de ellas. Pero también demostró sensibilidad ante la alarma que la actividad obrera provocaba en los empresarios privados. Declaró ilegales las tomas de empresas y de tierras y, en el marco de la declaración del estado de emergencia económica (septiembre de 1981), declaró suspendido el ejercicio del derecho a la huelga.

Por otro lado, se desarrolló entre 1979 y fines de 1981 una Intensa lucha entre las diversas corrientes políticas existentes en el movimiento obrero. Éste fue un proceso eminentemente urbano-industrial. En el campo, la existencia del movimiento obrero está directamente ligada al trabajo político del FSLN. No existió un movimiento sindical de trabajadores agrícolas antes de

la creación de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) en 1978; en este sentido, el FSLN no tenía competencia. Pero la situación era otra en las ciudades, donde por lo menos desde principios de la década de 1950 se había venido configurando un pequeño movimiento obrero, en condiciones de clandestinidad o legalidad precaria. Se trataba de un movimiento con orientaciones eminentemente reivindicativas, que no tuvo una participación significativa en la lucha política contra el somocismo —aunque protagonizó algunas luchas sindicales importantes— y cuyas afiliaciones políticas reproducían en general el espectro partidario (Vilas 1985).

La concentración de la actividad de estas centrales sindicales en la cuestión de la reivindicación salarial contrastaba con la posición mucho más cauta de la CST. Ésta, en efecto, se encontraba aprisionada entre la necesidad de asumir un papel activo en el terreno laboral, a fin de consolidarse en él y de responder a las expectativas de los trabajadores, y por otro lado, observar la estrategia de unidad nacional y economía mixta del FSLN y el gobierno revolucionario, lo que obviamente limitaba su posición reivindicativa en cuanto convertía a las demandas obreras en un elemento de una matriz de relaciones políticas en la cual se encuentra presente, asimismo, la burguesía.

Las dificultades de la posición de la CST resultan evidentes. Por un lado, su explícita afiliación al FSLN la identifica con un proyecto revolucionario que responde, en líneas generales, a las expectativas políticas de la mayoría de los trabajadores. Pero simultáneamente esa misma identificación reduce su capacidad para impulsar de manera eficaz las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores —puesto que ese proyecto incluye el mantenimiento de alianzas con la empresa privada— y la convierte, de alguna manera, en una especie de organismo oficial. En estas condiciones, la CST privilegia el proyecto global de la Revolución Sandinista, a costa de asumir un perfil bajo respecto de las reivindicaciones “sectoriales” de la clase obrera. Las centrales sindicales minoritarias —de orientación comunista, socialista y socialcristiana principalmente— absolutizan en cambio las reivindicaciones de corto plazo y soslayan, o colocan en un lugar secundario, la cuestión del proyecto revolucionario global. Éstas reducen la clase a lo laboral, mientras la CST diluye lo laboral en la unidad nacional. Debe señalarse que el carácter prioritario de la producción agropecuaria ha permitido a la ATC manejarse, en esto, con mayor margen de autonomía, conciliando con relativa eficacia su adhesión al proceso revolucionario con una notable combatividad reivindicativa.

La declaración del estado de emergencia económica en septiembre de 1981 se tradujo en una

desmovilización de la clase obrera que hoyes reconocida por la propia CST.⁵ La CST en efecto fortaleció sus articulaciones con el Estado y redujo las reverberaciones clasistas de sus proclamas y el nivel de todos modos bajo de sus reivindicaciones salariales, en aras de un enfoque más nacional. A partir de entonces el énfasis estuvo en la convocatoria a una mayor disciplina laboral, la elevación de la productividad y la incorporación de los trabajadores a la defensa militar del país. Vale decir, una concentración de su actividad en torno a las tareas definidas como prioritarias por el FSLN y el gobierno.

Las referencias al socialismo como meta estratégica de la lucha de los trabajadores se mantuvieron en el discurso político de la CST (cf. por ejemplo *Barricada*, 26 de enero de 1985), pero el enfrentamiento político-ideológico con la burguesía pasó a un lugar secundario. La contradicción de clase, que se había colocado al frente de las movilizaciones de 1981, cedió terreno ante la contradicción antimperialista, las urgencias de la producción y la defensa, y la primacía de la unidad nacional.

A fines de 1984 sin embargo, coincidiendo con la evidencia del crecimiento desorbitado de la especulación y su autonomización respecto de las políticas del gobierno, el sindicalismo sandinista planteó como una lucha central el enfrentamiento a los especuladores y a la intermediación improductiva (cf. por ejemplo *Barricada*, 21, 23, 24, 28 y 30 de diciembre de 1984). Esta línea de acción de la CST se definió en el marco de una reorientación general de la política económica y financiera del gobierno revolucionario, decidida a frenar la transferencia de recursos humanos y de capital hacia la esfera de la circulación.⁶ Las actividades informales, que habían sido consideradas por la política gubernamental con cierta tolerancia en cuanto se consideraba que de alguna manera contribuían al abastecimiento de la población, se convirtieron en el blanco de un conjunto de políticas tendientes a reducir su volumen y a dificultar su desarrollo. Ahora eran vistas como actividades parasitarias, cómplices con el mercado negro: una lacra social (de acuerdo a *El Nuevo Diario*, 30 de julio de 1986). La evidencia de la participación relativamente amplia de trabajadores asalariados en estas actividades llamó la atención sobre la importancia de la incorporación de la CBT a la campaña contra el sector informal.

El temario de resoluciones de la IV Asamblea Nacional de Sindicatos, de enero de 1985,

5 Cf. la entrevista con su secretario de organización en *Pensamiento Propio*, n. 33, mayo-junio de 1966.

6 En 1983 la masa de capital que circulaba por canales al margen del control gubernamental representó más de la cuarta parte del producto real del país, o seis meses de exportaciones, y en 1984 equivalía a casi la mitad del producto, o un año de exportaciones. Cf. Vilas, 1986b

convocada por la CBT, resume las orientaciones actuales del movimiento obrero: defensa del abastecimiento básico; lucha contra el agio y la especulación; elevación de la producción y la productividad. En el mismo sentido, el mensaje de la Dirección Nacional del FSLN “a los trabajadores nicaragüenses, obreros y campesinos, técnicos, productores, trabajadores administrativos y de servicios” con motivo del 1° de mayo (Día Internacional del Trabajo) propone “Doce tareas de la clase obrera y el pueblo: 1] defensa de la revolución; 2] apoyo al Servicio Militar Patriótico; 3] movilización de todos los productores en alimentos y exportación (pequeños, medianos y grandes, estatales, cooperativas); 4] atención a familiares de movilizados en defensa; 5] sobreesfuerzos en el trabajo en remplazo de los movilizados; 6] capacitación e incorporación de la mujer a la producción; 7] consolidar la vigilancia revolucionaria y la defensa civil; 8] impulsar el trabajo voluntario; 9] elevar los rendimientos del trabajo; 10] ahorro de recursos en la producción; 11] mejorar los controles administrativos, evitar el despilfarro y la malversación; 12] avanzar en la eliminación del pago en especie y el trueque de productos entre sindicatos (*Barricada*, 1° de mayo de 1985). Es interesante destacar que se trata de un mensaje que incluye en la clase obrera y el pueblo a los productores —denominación utilizada en Nicaragua para referirse en general a todo tipo de empresario agropecuario (pequeño, mediano y grande). La unidad nacional se expresa como unidad del conjunto de las clases productoras, y tiene como contrapartida el enfrentamiento a las clases parasitarias.

La agudización de las tensiones externas, particularmente de la guerra contrarrevolucionaria, ha llevado a reforzar las apelaciones en favor de la consolidación de la alianza de clases sobre la que se apoya la estrategia de unidad nacional. El discurso político dirigido hacia la clase obrera pone especial atención en la necesidad de solucionar los conflictos laborales sin detener la producción, sin llegar a confrontaciones violentas con los empresarios privados y con los administradores de las empresas estatales, y sobre todo” sin recurrir a la huelga. La necesidad de mantener la cohesión nacional por encima de las divisiones de clases, que siempre ha sido un tema central en la ideología sandinista, se hace más fuerte en condiciones de agresión militar externa, y se convierte en un tema recurrente en el diálogo del FSLN con los trabajadores. En particular, se invoca la experiencia de Granada, argumentándose que las divisiones internas del gobierno revolucionario, y en particular la ruptura de la unidad por posiciones extremas, crearon las condiciones para la intervención militar norteamericana y el colapso del proceso revolucionario (cf. por ejemplo Comandante Tirado López 1985).

Empleo

La reactivación inicial de la economía se tradujo en un crecimiento desigual del empleo: creció más en las actividades no agropecuarias que en las agropecuarias, más en el sector privado, y más en las actividades no productivas que en las productivas. En el nivel general de desempleo se redujo entre 1980 y 1983, y si bien la mayor capacidad de creación de empleos fuera de los sectores productivos habría de contribuir a generar, años más tarde, tensiones económico-financieras, entre tanto permitió dar algún tipo de solución al problema social de arrastre de la desocupación de la fuerza de trabajo.

A partir de 1984 la tasa de desocupación aumentó. Influyeron en esto tres factores principales; 1] las restricciones en las inversiones no productivas como respuesta a la creciente crisis económica; 2] la reducida capacidad de generación de empleo del programa de inversiones públicas; y 3] la caída de la inversión privada. El Cuadro II muestra la evolución de la tasa de desocupación global y desagregada en actividades agropecuarias y no agropecuarias. La tasa de desempleo creció más en las actividades

Cuadro II

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN, 1980-1985 (EN %)

	<i>1980</i>	<i>1981</i>	<i>1982</i>	<i>1983</i>	<i>1984</i>	<i>1985*</i>
General	22.4	19.0	19.9	18.9	21.1	22.3
Agropecuaria	27.6	23.3	28.3	24.3	25.1	19.3
No agropecuaria	18.3	15.8	14.0	15.2	18.4	24.2

*Preliminar.

FUENTE: INEC, INSS.

no agropecuarias que en las agropecuarias. Esto sugiere que el incremento del desempleo es más un producto de la crisis (de divisas, de insumos para la producción) que de la guerra, o en todo

caso el efecto de la guerra se siente más bien de manera indirecta, por la vía de la competencia por recursos extremadamente escasos. Asimismo la desocupación afectaría más a los asalariados que a los no asalariados, en la medida en que la crisis golpea más al sector industrial que al comercio y los servicios. En el sector industrial, donde el empleo cayó más de 13% entre 1980 y 1983, afecta más a los establecimientos pequeños que a los medianos y grandes (cf. Cuadro III).

Cuadro III

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL POR TAMAÑO DE EMPRESA (en porcentajes)

<i>Tamaño de empleo</i>	<i>1980</i>	<i>1981</i>	<i>1982</i>	<i>1983</i>
Hasta 9 personas	13	12	—	—
De 10 a 29 ”	11	9	3	4
De 30 a 49 ”	5	5	7	5
De 50 a 99 ”	12	14	14	11
100 personas y más	59	60	76	80
Total	100	100	100	100
n	45 040	47 472	40 712	39 111

FUENTE: INEC, *Encuesta de la industria manufacturera*, varios años.

—: menos de 0.5%.

Aunque no se cuenta con estudios sistemáticos, la información disponible permite pensar que por lo menos una parte de los asalariados desplazados por la crisis ha derivado hacia el sector informal urbano, y en particular hacia las múltiples posibilidades que ofrece, dentro de él, el autoempleo. Este parece haber sido el caso, sobre todo, de los trabajadores industriales que laboraban en establecimientos pequeños y medianos. La crisis económica agrega sus efectos, en este sentido, a un conjunto de factores preexistentes: la expectativa relativamente fundada de obtener mayores ingresos que por la vía del salario; la existencia de estrechas vinculaciones con el sector informal en las familias de las clases populares urbanas; la imagen de mayor libertad y autonomía de las actividades en el sector, por oposición a la disciplina del trabajo asalariado. En

otros casos los trabajadores, especialmente si cuentan con algún grado de calificación, o están por migrar hacia Costa Rica, Panamá o México, donde el mercado de trabajo suscita expectativas de mejor remuneración.

Salarios.

Existe una fuerte concentración de los salarios urbanos del sector formal (que representa casi 80% de todos los asalariados). El Cuadro IV muestra la evolución durante 1985 y 1986 de acuerdo a tres fechas de aumentos. La principal limitación de este cuadro es que se refiere de manera indiscriminada a todos los asalariados del sector formal, sean obreros o no.

Cuadro IV

CONCENTRACIÓN DE LOS SALARIOS URBANOS POR NIVELES (en porcentaje del total)

<i>Niveles de salario</i>	<i>Enero 1985</i>	<i>Mayo 1985</i>	<i>Marzo 1986</i>
50% inferior	26	31	28
25% medio-alto	28	26	27
20% alto	33	32	34
5% superior	13	11	11
0.5% tope	1.4	1.2	1.3
Índice de Gini	.806	.785	.793

Fuente: Ministerio del Trabajo y elaboración propia.

El Cuadro V presenta una desagregación por categoría ocupacional, pero de todos modos es imposible desagregar a los obreros de los empleados administrativos, ya que la información disponible se refiere a ambas categorías en conjunto.

Cuadro V

DISTRIBUCIÓN DE LOS SALARIOS POR CATEGORÍA DE ASALARIADOS (En %

del total)

	<i>Obreros</i>		<i>Técnicos y profesionales</i>		<i>Dirección</i>	
	<i>% del empleo</i>	<i>% de los salarios</i>	<i>% del empleo</i>	<i>% de los salarios</i>	<i>% del empleo</i>	<i>% de los salarios</i>
Enero 1985	62	38	35	55	3	7
Mayo 1985	62	42	35	51	3	7
Marzo 1986	62	40	35	53	3	7

FUENTE: Igual que el Cuadro IV.

El cuadro es representativo dentro de sus limitaciones, porque durante el periodo considerado se aplicó el *Sistema Nacional de Organización del Trabajo y los Salarios* (SNOTS), un esquema diseñado para desarrollar una concepción del empleo y los salarios oficialmente caracterizada como científica. El gobierno revolucionario depositó grandes esperanzas en el SNOTS, y lo impulsó de manera decidida a pesar de las polémicas y resistencias que suscitó en amplios sectores de los trabajadores.⁷

Resulta evidente la existencia de la fuerte concentración que se ha registrado en materia de salarios. Y, al mismo tiempo, los tira y aflojes que se han experimentado entre los obreros y empleados administrativos por un lado, y los técnicos y profesionales por el otro. Aunque el periodo considerado es corto para extraer conclusiones más o menos sólidas, parece claro que mientras los obreros y empleados, que ocupan los tramos más bajos de la escala, captan una proporción de salarios que es 40% menor que su participación en la masa de perceptores, los asalariados de clase media tienen una participación porcentual equivalente a una vez y media su peso en el total de perceptores.

Después de un reajuste inicial, el gobierno revolucionario adoptó una política de control relativamente firme de los salarios nominales que se mantuvo prácticamente inalterada hasta 1983. Combinada con un proceso inflacionario que se aceleró desde 1981, esa política generó un rápido deterioro de los salarios reales. Entre 1980 y 1985 el salario real se redujo casi 40% de acuerdo a la evolución del índice general de precios al consumidor (cf. Cuadro VI), y entre 40% y

⁷ Un análisis del SNOTS excede los límites de este trabajo; cf. el excelente estudio de Stahler-Sholk 1986.

60% si se toma como deflactor el costo de algunas canastas de consumo alternativas (cf. Stahler-ShoIk, 1985). Durante el primer semestre de 1986, la vertiginosa aceleración de la inflación provocó una caída adicional del poder adquisitivo de los salarios de casi 70%.

Cuadro VI

EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL,* 1980-1985 (En números índices; 1980 = 100)

1980	1981	1982	1983	1984	1985
100	101.4	88.5	77.2	77.3	62.7

*Sueldos y salarios pagados a cotizantes del seguro social.

FUENTE: Elaboración propia de cifras de INEC e INSSBI.

La política de control se justificó como una medida antipática pero inevitable para liberarse del impacto inflacionario de los aumentos salariales. No podría descartarse sin embargo que la decisión respondiera asimismo a la intención de garantizar márgenes de rentabilidad que estimularan a la empresa privada a reiniciar su actividad productiva, y permitieran a las empresas estatales sanear sus exangües finanzas. En todo caso es evidente que esta política cautelosa del gobierno revolucionario sorprendió a la mayoría de los trabajadores y alimentó los enfrentamientos entre la CST y el gobierno por un lado, y las demás centrales sindicales por el otro.

Al principio se trató de paliar los efectos más irritantes de este control con el aumento del llamado "salario social"; entendiéndose por talla ampliación de los servicios sociales. La denominación era inadecuada ya que no se exigía, como en el salario, una contraprestación a cambio del goce de derechos, que en principio, según se vio en la sección 3, estaban a disposición de todos los que los necesitaran, fueran asalariados o no.

Pero con las restricciones financieras, el colchón del salario social se redujo rápidamente y ya para 1981-82 nadie utilizaba la expresión. Se recurrió entonces al salario *en especie*, consistente en entregar como parte de pago mercancías producidas por los trabajadores: telas en las fábricas textiles, gaseosas en las de bebidas sin alcohol (sodas), leche y derivados en las procesadoras de productos lácteos, zapatos en las empresas de calzado, etcétera. La idea inicial era que el trabajador adquiriera a precio de costo estos bienes para su uso; luego se incrementó la cantidad

para que se ayudara con pequeñas ventas; en muchos casos se daban productos incluso a los familiares de los trabajadores. En determinado momento, se hizo evidente que una parte importante de la producción de las empresas se derivaba hacia el mercado negro a través de estos canales.

Según estimaciones, en algunas ramas de la industria el pago en especie llegó a representar en 1984 más de 45% del ingreso real de un trabajador.⁸ La asignación de bienes por esta vía abarcó también a los técnicos y profesionales, y a los empleados administrativos. Sin embargo tuvo lugar casi exclusivamente en las empresas del APP (Área de Propiedad del Pueblo), donde la vigencia de las normas salariales era mucho más severa que en el sector privado.⁹ El salario en especie comenzó siendo un atajo de las empresas del APP para sortear las limitaciones de la política salarial del Estado, y un mecanismo de retención de personal calificado que, de otra manera, emigraba hacia la actividad privada o incluso el sector informal. Pero en los hechos se convirtió rápidamente en una fuente de ingresos mucho más importante que el salario monetario, y en un mecanismo a través del cual el Estado alimentaba el mercado negro que otros ámbitos de ese mismo Estado trataban de combatir.

El auge del pago en especie se alcanzó en 1984. Para esa época involucraba asimismo un complejo sistema de trueques, en cuya virtud una parte de la producción de una empresa era entregada a los sindicatos de otras empresas a cambio de cantidades de las producciones respectivas; el sistema permitía que el personal de cada empresa accediera directamente, y a

⁸ De acuerdo a un informe del Ministerio de Industria, durante 1984 cinco empresas del APP en la rama del calzado entregaron 77 750 pares de calzado a sus 1 070 trabajadores (casi 73 pares al año por trabajador). Se empezó con la entrega de un par al mes, pero se llegó a entregar seis pares al mes en promedio. La diferencia entre el precio de adjudicación y el precio que podía obtenerse por cada par vendido en el mercado negro era entre 1:10 y 1:12. La empresa estatal Enaves, de la rama de confección de ropa, distribuyó casi 23 mil prendas a sus 978 trabajadores (casi 24 al año), en particular pantalones tipo vaquero, de exportación. En este caso la diferencia entre el precio de asignación al trabajador y el precio de venta en el mercado negro se estimó en 1:18. En la rama textil la empresa FANATEX del APP, entregó 270 mil yardas de tela a sus 1600 trabajadores, y la empresa TEXNICA, también del APP, 205 mil yardas a 1 150 trabajadores. Es interesante señalar que el consumo de telas por toda la pequeña y mediana industria de confección —que representa alrededor de dos tercios de la producción de la rama— de ropa es de un millón de yardas al año; esto significa que durante 1984 2 750 trabajadores recibieron en dos empresas tanta tela como la que demanda la pequeña y mediana industria del vestido en seis meses. Por su parte la empresa estatal MILCA, embotelladora de la Coca Cola, llegó a entregar hasta 40 cajillas de 24 botellas por mes a cada trabajador; en este caso la diferencia de precios era mas modesta: 1:2.4. Cf. diarios *Barricada* y *Nuevo Diario* de mayo, junio y julio de 1985.

⁹ En el sector industrial privado no es infrecuente encontrar un sistema de doble contabilidad para los salarios: una contabilidad “blanca”, de acuerdo a los niveles salariales oficiales, y una contabilidad “negra”, con niveles salariales superiores a los permitidos por la ley: cf. Dijkstra, 1985.

precio de costo, a los bienes comprendidos en el trueque.

La introducción del salario en especie y las reacciones que suscitó en los asalariados tienen múltiples implicaciones. En primer lugar, cuando el desfase entre salario en dinero y salario en especie es tan grande, el concepto mismo de salario cambia de sentido. El salario deja de ser la expresión monetaria del valor de reproducción de la fuerza de trabajo, y se convierte en los hechos en el símbolo monetario de una relación laboral que permite al trabajador acceder al capital comercial privado por la vía del subsidio estatal.¹⁰

En segundo lugar, se relaja la disciplina laboral y se hace muy difícil el trabajo de concientización productiva, dos cuestiones a las que el FSLN y la CST adjudican una gran importancia. Por un lado, se desata una competencia más o menos abierta entre los trabajadores, por la consecución de mayores cantidades de mercancías. Por el otro, la ganancia que reporta la reventa de estos bienes es mucho mayor que el sobresalario que puede obtenerse trabajando horas extras o incrementando la intensidad del trabajo. Todo esto en momentos en que el discurso político sandinista hacia los trabajadores exalta los méritos del obrero que trabaja duro, sobrecumple las metas y produce más.

En tercer lugar, se estimulan y amplían las vinculaciones de los asalariados con el sector informal y con el mercado negro, merced al subsidio del APP a expensas de sus propios canales de distribución. El fortalecimiento de estas vinculaciones se ve favorecido por la casi completa inexistencia en Nicaragua de lo que podríamos llamar una familia obrera, vale decir, una familia que reproduce su existencia material sobre la base del salario. La gran mayoría de las familias de las clases populares urbanas combina la generación de ingresos asalariados y no asalariados, y una proporción alta de los obreros industriales asume en realidad un doble carácter: trabajador industrial y propietario de una pequeña finca, o de un tallercito, o de una venta. En estas condiciones, el mantenimiento de la condición de obrero suele fundamentarse no tanto en el monto del salario que se percibe, como en los beneficios que reporta el seguro social, o la posibilidad de comprar bienes a precios oficiales en el comisariato de la empresa, o algo similar.

La magnitud de producción involucrada, su impacto sobre el crecimiento del mercado negro y sobre el desabastecimiento de los mecanismos oficiales de distribución, y el malestar que se

¹⁰ El punto fue señalado de manera tan inadvertida como formal por un funcionario de la empresa estatal. MILCA (embotelladora de la Coca Cola), cuando en medio de las críticas al salario en especie, anunció que su empresa continuaría entregando gaseosas a precio de costo únicamente a los trabajadores que fueran dueños de *pulperías* (tiendas) y contaran con licencia comercial expedida por el Ministerio de Comercio Interior: cf. *Barricada*, 15 de abril de 1985.

generó en los asalariados que no podían acceder a este recurso para incrementar sus ingresos, llevaron a un movimiento de crítica que condujo a su eliminación a mediados de 1985. La decisión no fue fácil y encontró resistencias obvias en los beneficiarios, que se quedaron sin una porción grande de ingresos. En algunas fábricas se registraron incluso renunciaciones masivas de personal: en la empresa textil FANATEX por ejemplo, la eliminación del pago en especie motivó la salida de alrededor de trescientos trabajadores, casi 20% de su planilla.

La situación salarial ha favorecido un desplazamiento de obreros hacia el sector informal urbano y una reducción de la masa de asalariados. Solamente entre 1981 y 1982 entre cinco y nueve mil obreros no agropecuarios salieron de sus actividades (Vilas 1986a: 245), y aunque se carece de información sistemática para años posteriores, todo indica que el movimiento ha continuado. La reducción del nivel general de actividades en la industria por efecto de la crisis, y los mayores ingresos que es posible percibir en actividades alternativas, constituyen factores de desestímulo al trabajo asalariado, que se suman al atractivo de elementos adicionales: menos controles sobre la actividad del individuo, menor presión política e institucional, etcétera. Sin embargo, el gran número de vacantes que se registra actualmente en la industria manufacturera, especialmente en el APP, lleva a pensar que la fuerza que impulsa a los trabajadores a salir del área productiva y de las actividades formales es la sostenida reducción de las remuneraciones reales, más que la caída del nivel general de actividad provocado por la crisis.

Otro efecto generalmente imputado a la caída de los salarios reales es la fuerte rotación de personal entre empresas e instituciones, especialmente en el sector público. De alguna manera la situación lleva al trabajador a estar alerta a las posibilidades de obtener mejor salario o mejores condiciones de trabajo en otro lado; el empleo se convierte en un puesto de observación privilegiado para la búsqueda de una posición mejor. Esta actitud parece encontrarse particularmente desarrollada en los cuadros técnicos y profesionales, pero no escapan a ella los trabajadores más calificados.¹¹

Durante los años iniciales la condición salarial de los trabajadores del campo fue peor que la de los obreros urbanos. Los salarios rurales eran mucho más bajos que los urbanos, y las condiciones de abastecimiento peores; las alternativas que se abren a los trabajadores urbanos por la vía del

11 De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio reciente sobre el sector público, la rotación de personal involucró durante el primer semestre de 1986, a 34% del personal de la construcción, 34% del personal del Ministerio del Trabajo, 48% del personal del Banco Central de Nicaragua. Cf. *El Nuevo Diario*, 19 de septiembre de 1986.

sector informal, el salario en especie y otras, son casi inexistentes en el campo. En otro trabajo hemos indicado la incidencia de esta situación en el déficit de fuerza de trabajo en las cosechas de agroexportación (Vilas 1984).

Sin embargo en años recientes se ha tratado de reducir estas diferencias. La relación salario medio urbano/salario medio rural, que llegó a ser de casi 2.4 en 1980, se redujo a 1.8 en 1984, a causa de una política de incrementos que favoreció más a los segundos (un aumento de 97% entre ambos años) que a los primeros (56%). La evolución diferenciada de los incrementos de salarios en la actividad agropecuaria y en la industria, conjugada con una diferenciación similar en materia de producto por hombre ocupado, determinó asimismo que la relación salario medio/producción por trabajador evolucionara de manera menos negativa en el sector agropecuario que en el industrial. En el primero se había deteriorado 3.5% en 1985 con relación a 1980 (mientras que en 1983 el deterioro había alcanzado a casi 19%), en tanto en el sector industrial la relación se deterioró en 1985 casi 20% con relación a 1980 (Stahler-Sholk 1986: Cuadro V). A principios de 1985, coincidiendo con cierta flexibilización de la política salarial, el FSLN definió que, en materia de aumentos de salarios, los trabajadores del campo (permanentes y estacionales) tendrían prioridad (Tirado López 1985: 121).

La extensión de la seguridad social al campo significó un avance en las condiciones de trabajo; asimismo hay mayor preocupación por el efectivo cumplimiento de las normas de higiene laboral y seguridad ocupacional. La A TC por su lado está desarrollando una campaña tendiente a incrementar la proporción de trabajadores permanentes, a fin de reducir progresivamente la estacionalidad en el empleo rural. Pero de todos modos las condiciones de trabajo siguen siendo poco satisfactorias y eso parece incidir en el rendimiento de la fuerza de trabajo.

Aunque no se dispone de información sistemática, es plausible suponer que la “tentación” del sector informal es mayor para los obreros de la ciudad que para los del campo. En éstos el movimiento de desproletarización parece estar ligado más bien a las expectativas de obtener tierra que emanan del proceso de reforma agraria. Estas expectativas se acrecentaron en la medida en que hasta 1984 la evolución negativa de los salarios agropecuarios fue más aguda aún que la de los salarios industriales —a pesar de que en el mismo periodo el nivel de producción por hombre ocupado en el sector agropecuario se mantuvo más o menos constante— e incluso más aguda que el deterioro de los precios reales para la producción campesina (Vilas 1984). Es posible que el atractivo de una recampesinización aumente, como resultado del viraje

experimentado en la política de reforma agraria y desarrollo agropecuario desde mediados de 1985: ampliación y aceleración de la distribución de tierras, mejoramiento sustancial de los precios reales a los productores, agilización del sistema bancario, más atención del Estado a la situación del abastecimiento, etcétera.

Productividad laboral y actitud hacia el trabajo

Capitalismo y socialismo difieren en muchas cosas, pero se parecen por lo menos en una: en el concepto de un buen obrero. Tanto para el capitalismo como para el socialismo, un buen obrero es un obrero que trabaja duro. En esto, las revoluciones de liberación nacional se parecen mucho al socialismo. Ésta no es, ciertamente, la imagen que los obreros tienen del socialismo o de la liberación nacional, y es por eso que la cuestión de la productividad del trabajo constituye un tema central en las etapas iniciales de toda revolución popular.

Durante los primeros años del régimen revolucionario la productividad del trabajo aumentó en la industria manufacturera, pero lo hizo fundamentalmente en las empresas más grandes, y más en el sector privado que en el sector público de la economía. Este incremento fue básicamente un resultado de la reactivación general de la economía, y tuvo lugar en un contexto de deterioro de los salarios reales y de transferencia de ingresos de los asalariados hacia los no asalariados, y de los trabajadores productivos hacia los no productivos (Vilas 1986a: 208.12). La respuesta de los trabajadores industriales a los requerimientos del gobierno revolucionario en aras de mayor producción y productividad parece haber sido favorable; en la medida en que el incremento de la productividad tuvo lugar en el marco de las condiciones materiales adversas señaladas, es posible pensar que por lo menos una parte importante de la respuesta de los trabajadores se basó en convicciones políticas o, por lo menos, en expectativas favorables respecto de la situación general.

La situación fue diferente en el campo, donde en general la productividad cayó. Sin duda influyó aquí un sentimiento generalizado de emancipación que se vivió, fundamentalmente, como menor compromiso laboral. La duración de la jornada laboral experimentó reducciones agudas, y la intensidad del trabajo disminuyó de manera sensible.¹² El desenvolvimiento de la crisis se ha

12 Sin embargo, una investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA) encontró que aunque todos los administradores entrevistados señalaron una reducción de la productividad del trabajo de campo respecto de los niveles prerrevolucionarios, ninguno recomendó volver a ellos. En general sus

sentido también en el terreno de la productividad. Las restricciones de divisas para la importación de insumos y repuestos, la política tendiente a retener empleo, la caída del nivel general de actividad, conspiran contra el mantenimiento de los niveles de productividad de los años anteriores. La falta de materias primas y otros insumos pone a las empresas en la disyuntiva de mantener los ritmos de —producción y reducir el tiempo de trabajo, o bien evitar el paro laboral disminuyendo los ritmos.

El debate que tiene lugar en los momentos actuales en Nicaragua plantea si acaso no existen, además de los factores objetivos señalados, otros, de naturaleza subjetiva, y que emanan del propio trabajador: trabajo a desgano, indisciplina laboral, falta de motivación. Incluso, una forma de expresar de manera pasiva pero colectiva su insatisfacción social. Indicadores no faltan: entre 1983 y 1984, por ejemplo, el ausentismo laboral subió de 33% a 50%.¹³ La rotación del personal es escalofriante. En el campo, la jornada laboral de seis horas de antes del triunfo revolucionario se redujo a jornadas de dos y tres horas diarias.¹⁴ Es difícil, en las condiciones presentes, discernir claramente unos factores de otros. Es evidente que las condiciones materiales por las que atraviesa Nicaragua son poco propicias para pensar en más productividad. Ello no sólo por factores macroeconómicos generales, sino por las circunstancias específicas en que se desenvuelve la actividad laboral: salarios reales bajos, abastecimiento problemático, condiciones de trabajo insatisfactorias.¹⁵ Además, cuando una proporción relativamente grande de los

recomendaciones se situaron entre 10 y 15% por debajo de aquellas normas, aunque fueron superiores a los niveles efectivamente registrados después de 1979. No parece excesivo interpretar esto como un reconocimiento implícito de que los mayores niveles anteriores eran resultado, en buena medida, del clima represivo que imperaba en el campo durante la dictadura.

13 Cf. declaraciones del Comandante Víctor Tirado en *El Nuevo Diario*, 15 de mayo de 1985.

14 Cf. declaraciones del Comandante Tirado en *Barricada*, 20 de noviembre de 1984, y del Comandante Jaime Wheelock, Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, en *Barricada*, 17 de junio de 1986.

15 Por ejemplo, el aumento de los accidentes de trabajo. De acuerdo al Ministerio del Trabajo, durante 1984 se registró un promedio de veinte accidentes por día; en el 80% de los casos, por responsabilidad de las empresas que no cumplen con los reglamentos de seguridad (cf. *Barricada*, 10 de abril de 1985). También ha incidido en esto la poca combatividad del sindicato, y el desinterés de los propios obreros. Los trabajadores de la fábrica de acumuladores Hasbani, por ejemplo, se mostraron renuentes a las pruebas de contaminación del Ministerio del Trabajo, porque estimaban que implicaba perder tiempo y atentar contra los estímulos a mayor productividad. Las dificultades en el abastecimiento de los trabajadores parecen jugar un papel determinante en la caída de la productividad. En varias empresas algodoneras de la región II (departamentos de León y Chinandega) se encontró que la reducción de la jornada de trabajo en la cosecha estaba ligada a la incapacidad de las empresas de asegurar la alimentación de sus trabajadores. Los obreros trabajaban un par de horas temprano en la mañana, entregaban el algodón y después de cobrar el jornal salían a buscar comida —a veces, a cazar una iguana—, para regresar tan sólo

trabajadores mantiene vínculos con una pequeña parcela, u otra forma de reproducción extra-salarial, no es raro que la disciplina del trabajo fabril entre en colisión con los requerimientos de esta otra fuente de ingresos.¹⁶

A veces, el propio Estado se encarga de neutralizar iniciativas que buscan estimular alzas en la productividad. Por ejemplo, en octubre de 1984 el Ministerio del Trabajo emitió una normativa salarial para los cultivos del ciclo agrícola 1984/1985 que representaba una jornada de 4.5 horas promedio, o sea una recuperación del promedio de 2.5 a 3 horas. Pero a causa de la inflación y de la presión que ésta ejercía sobre los ingresos reales de los trabajadores, el aumento salarial no se ligó a un mayor esfuerzo laboral, sino que el incentivo se pagó prácticamente a todo el mundo independientemente de que cumpliera o no con la norma.

También la guerra se hace sentir en este terreno. En la actualidad una proporción variable pero siempre importante de la fuerza de trabajo de las empresas se encuentra afectada de alguna manera a la defensa: reclutada por el servicio militar, incorporada a la reserva, integrada a las milicias territoriales, etcétera. En algunos casos esto significa que el trabajador deja la empresa por un periodo que puede alcanzar hasta dos años; en otros casos, debe participar periódicamente en movilizaciones, entrenamientos, etcétera, por tiempo menor. Es evidente que en estas condiciones resulta muy difícil para una empresa mantener estables sus ritmos de producción y sus niveles de productividad.

Un punto que destaca en el tratamiento de la cuestión de la productividad del trabajo por el gobierno revolucionario, el FSLN y la CST, es el énfasis extremo que se coloca en la actitud de los trabajadores hacia la producción (cf. por ejemplo Tirado López 1985: 121, 134, 135). El discurso político sandinista no desconoce la multiplicidad de factores que inciden en el logro de niveles determinados de productividad laboral, y en particular en la variedad de factores de desajuste que emanan de la conjugación de crisis y guerra. Pero al mismo tiempo el eje de los argumentos se sitúa en torno a la necesidad de que los obreros trabajen más duro aumentando la intensidad de su trabajo y extendiendo voluntariamente la duración de la jornada laboral.

En principio el enfoque no es incorrecto. En condiciones precarias como las que imperan en

al día siguiente: cf. entrevista del autor con Edgardo García, Secretario General de la ATC, marzo de 1986.

¹⁶ Ésta es la situación que se observó, por ejemplo, en la empresa estatal INCA, la mayor productora de alambres, clavos y otros productos metálicos, ubicada en la ciudad de Masaya. De acuerdo a una investigación, alrededor de dos tercios de los obreros de INCA son, al mismo tiempo, propietarios de pequeñas fincas en las inmediaciones de Masaya, dedicadas al cultivo de granos básicos algodón, hortalizas, con fines comerciales. Cuando la época de cosecha se aproxima, sube el índice de ausentismo en INCA. Cf. Castillo et al. 1985.

Nicaragua —técnicas de producción atrasadas, restricciones externas en materia de insumos y repuestos, reorientación de recursos hacia la defensa, etcétera—, es difícil pensar en incrementos significativos en la productividad sin un esfuerzo adicional de los trabajadores. Además, la fuerza de trabajo se presenta como posiblemente la única de las múltiples variables intervinientes en la determinación de los niveles de productividad, sobre las cuales es posible ejercer todavía cierto margen de maniobra. Pero al mismo tiempo parece claro que las propias dificultades de la situación objetiva inhiben la posibilidad de obtener grandes resultados al respecto, en la medida en que son pocos los estímulos materiales con que puede complementarse el trabajo ideológico.

El deterioro profundo de los salarios reales y de las condiciones de abastecimiento debilita la relación entre productividad y salarios. Durante todos estos años los salarios cayeron mucho más que la productividad; a fines de junio de 1986 el poder adquisitivo de los salarios había alcanzado un valor índice 20 con relación a un índice 100 en 1980. En estas condiciones la productividad se independiza de cualquier consideración en materia de salarios. La insistencia en ligar incrementos de salario a incrementos de productividad y a la prolongación de la jornada de trabajo tiene sentido cuando los salarios representan una vía para acceder a ciertos beneficios materiales. Cuando ello no es así, porque el nivel real del salario es tan reducido, y además existe un desabastecimiento objetivo en el mercado, el estímulo de un mayor salario desaparece, o bien se reduce mucho. Tanto más cuando siguen existiendo las posibilidades de empleo alternativo en el sector informal, con expectativas de ingresos mejores.

Por otro lado, es posible que la eficacia de las interpelaciones ideológicas en favor de esfuerzos adicionales se vea limitada por la vigencia del esquema de economía mixta, y la necesidad subsiguiente de derivar parte del excedente, y por lo tanto parte del esfuerzo adicional de los trabajadores, a la burguesía patriótica. En todo caso, se suscita un contraste entre los incentivos en dólares para los productores patrióticos, y el incentivo del “gallo pinto” (la comida) para los asalariados: obreros y combatientes.

De alguna manera, esta diferenciación de estímulos implica una reproducción de las desigualdades sociales dentro del proyecto revolucionario. Esta reproducción es preocupante para un proceso de transición hacia el socialismo, pero también lo es, aunque por motivos diferentes, para un proceso de transición al desarrollo. Para el primero, porque se supone que uno de sus objetivos es, al contrario, la reducción de las desigualdades de clase, e incluso su eliminación. Para el segundo, porque resta eficacia a las interpelaciones ideológicas que buscan estimular el

desarrollo de una conciencia productiva en los trabajadores.

La conjugación de crisis y guerra favorece esa reproducción, pero la favorece dentro del marco de vigencia de la estrategia de alianza de clases con esos sectores del capital. Tal vez no sea contradictorio, en este contexto, el desfase que es posible observar entre la abierta proclividad de los trabajadores a efectuar esfuerzos adicionales en la defensa y en la guerra, y su relativa reticencia a efectuarlos en la producción. En otras palabras: los mismos trabajadores que muestran un comportamiento heroico en la lucha militar frente a la contrarrevolución, cuando son desmovilizados y retornan a sus centros de trabajo rápidamente se integran a las pautas de menos esfuerzo que parecen privar en ellos. Se le ofrece a la revolución la vida, con más facilidad que se le ofrece a la empresa una hora de trabajo adicional. Parece razonable pensar que en el marco de una estrategia de unidad nacional multclasista, las interpelaciones ideológicas al plus esfuerzo de los trabajadores tienen terreno más fértil en la defensa de la soberanía nacional —y por lo tanto de la revolución— que en el campo de la economía mixta.

Con el fin de abonar con argumentos materiales los incentivos ideológicos, durante 1986 se ha venido desarrollando una política de mejoramiento de los estímulos monetarios por sobre cumplimiento de metas y mayores rendimientos, que parece estar dando resultados positivos.¹⁷

Crisis, guerra y reconfiguración de la clase

La conjugación de la crisis económica —en particular su incidencia en la reducción del nivel de actividad y de empleo en los sectores productivos— con el incremento de la guerra, han incidido además en el redimensionamiento de la clase obrera y en su composición interna.

En primer lugar, la defensa nacional se ha convertido posiblemente en la mayor fuente de empleo asalariado, o en una de las más importantes. Si se acepta como plausible la estimación de un 10% de la PEA en la defensa (cf. *Barricada*, 17 de junio de 1986), ello significa que entre 105 y 110 mil personas se encuentran ligadas de una forma u otra a la guerra como combatientes, en tareas de apoyo logístico, etcétera. Es decir, a mediados de 1986 alrededor de 23% de los

¹⁷ Un estudio preliminar del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria revela incrementos en la jornada de trabajo en el campo respecto de 105 años anteriores. En lo que va del ciclo agrícola 1986/87 la jornada laboral se incrementó en promedio 9% respecto del ciclo 1985/86, habiéndose alcanzado cumplimientos de 98% y 90% respectivamente en las normas y jornadas. De acuerdo al informe la jornada del ciclo 1985/86 fue de poco más de cuatro y media horas en promedio, y se incrementó en el ciclo presente a más de cinco horas promedio. De acuerdo al Ministerio, los incrementos de los salarios (37% promedio) y de los pagos por sobrecumplimiento de las metas (50%) explican, aparte del trabajo ideológico, las diferencias.

asalariados corresponde a la defensa de la soberanía nacional. Aparte del hecho de que ninguna actividad productiva puede ofrecer una concentración de asalariados de magnitud similar, esta situación separa la cuestión del salario de la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que por decisión política la alimentación de estos asalariados directa o indirectamente armados está priorizada, y en el caso de los combatientes, efectivamente garantizada.

En segundo lugar, la guerra ha acelerado el proceso de feminización de la fuerza de trabajo rural, que ya venía en incremento como resultado de la migración de la mano de obra masculina hacia actividades mejor remuneradas en las ciudades. Con la masiva incorporación de los hombres a las milicias territoriales y al servicio militar, la participación laboral de la mujer ha crecido rápidamente en el campo. Este fenómeno se encuentra más desarrollado en el APP que en el sector privado, y más en las actividades estacionales que en las permanentes. Durante el ciclo agrícola 1983/84 la participación laboral de las mujeres se estimó en 42% del empleo total, y en el ciclo 1984/85 creció a casi 50%, pero en algunos rubros la participación fue mucho mayor: 70% en el corte de tabaco, 60% en la cosecha de algodón, 70% en la de café (Criquillon et al. 1985:22). Aunque con menor magnitud, la participación laboral de las mujeres se está incrementando también en la industria manufacturera en el APP.

5. EL PORVENIR DE LA CLASE OBRERA

La exposición de las secciones precedentes fue suscitando algunas consideraciones de tipo más general que vamos a reunir y desarrollar aquí, apuntando a las perspectivas que se presentan para el desarrollo futuro de la clase obrera en la revolución.

En primer lugar, se ha experimentado un redimensionamiento negativo de la clase. Aunque no se dispone de estadísticas, o de otro tipo de información sistemática amplia, es razonable afirmar que hoy existen menos obreros que hace siete años. Esto es resultado, ante todo de las tantas veces mencionada conjunción de crisis y guerra, aunque pudo verse que, a su manera, la guerra ha generado un nuevo ámbito de empleo asalariado. De todos modos la crisis y la guerra han provocado una abrupta reducción de los asalariados productivos, es decir los que, para la tradición marxista forman el proletariado en sentido estricto. La presión sobre los obreros se hizo sentir ante todo en la industria, y aunque los factores de reducción se mantienen, es posible

pensar que la capacidad de expulsión de fuerza de trabajo esté agotándose, a menos que se admita la posibilidad de recortes adicionales muy drásticos en el de por sí muy debilitado parque industrial. En el campo, la conjunción de crisis y guerra está forzando desde 1985 una reorientación más o menos profunda de las estrategias originales de transformación y desarrollo, reduciendo el énfasis en la agroexportación e incrementando la importancia relativa de la producción para el mercado interno. Una estrategia, para decirlo con una simplificación tal vez excesiva, menos obrera y más campesina.

El sector informal fue, por lo menos hasta hace un par de años, el destino principal de los obreros que abandonaban la actividad productiva, o por lo menos la actividad asalariada. La opción existió sobre todo para los trabajadores urbanos, aunque no se puede descartar que también funcionara para algunos sectores de trabajadores rurales que se desplazaron hacia las ciudades, impulsados por la caída del salario en el campo y por el lento desenvolvimiento de la reforma agraria hasta 1985. En los momentos actuales un conjunto de políticas gubernamentales tiene como objetivo reducir las dimensiones enormes que alcanzó el sector y establecer trabas a su desarrollo. Por lo menos en Managua estas políticas están teniendo cierto éxito. Se plantea por lo tanto, nuevamente, la interrogante del destino de la fuerza de trabajo que es desplazada del sector informal por las políticas mencionadas. En algunos casos, cuando la vinculación con la pequeña finca no se perdió del todo, el “retorno a la tierra” se presenta como una alternativa, favorecida por el impulso reciente a la reforma agraria.¹⁸ Para la mayoría, sin embargo, es posible que no quede más alternativa que la actividad informal, si bien con niveles de ingreso más bajos y de mayor inestabilidad. El compromiso del gobierno revolucionario y el FSLN con una política de contención salarial durante los primeros años generó un rezago muy grande de las remuneraciones que contribuyó a la reducción del número de asalariados en general, y de obreros en particular. La reducción se sintió sobre todo en el APP. El sector privado se las ingenió para eludir los controles del Ministerio del Trabajo y pagar salarios más altos. Esto le permitió atraer fuerza de trabajo calificada desde el sector público y, de paso, desacreditar la política salarial del gobierno, al gobierno, y al FSLN que la respalda.

Existe evidencia de que también varias instituciones del sector público debieron recurrir a sobre-salarios implícitos a fin de retener a su personal, o para conseguir fuerza de trabajo calificada para proyectos prioritarios de desarrollo. Posiblemente no hubo más alternativas, pero

¹⁸ En algunos departamentos se ha comenzado incluso a entregar tierras a trabajadores del sector informal: pequeños productores artesanales, pequeños comerciantes; cf. *Barricada*, 21 de abril y 21 de septiembre de 1986.

es indudable que este comportamiento del Estado en contra de su propia legislación salarial fue poco propicio para convencer a los trabajadores de sus ventajas. Además, los incentivos salariales y extrasalariales son mayores y más accesibles para los técnicos y profesionales, aunque recientemente en algunas empresas priorizadas del APP parece estar iniciándose una tendencia más equilibrada.

Los desajustes generados por la política salarial obligan a interrogarse respecto de cuáles fueron las razones que llevaron a adherir de manera tan firme a ella. La posición sustentada casi unánimemente por el gobierno, el FSLN y las dirigencias sindicales sandinistas es conocida: en las condiciones presentes, mayores salarios, si no son acompañados por mayor productividad, impactan directamente en el nivel de precios y refuerzan el proceso inflacionario. Pero el argumento es rebatible en términos teóricos y, en el caso de Nicaragua, en términos empíricos también: la aceleración del proceso inflacionario tuvo lugar durante la vigencia de un control bastante rígido de los salarios nominales; en estos años el salario funcionó como una variable de ajuste del sistema económico global.

Sin descartar la existencia de una pluralidad de factores, queremos señalar la incidencia de varios elementos de tipo ideológico.

En primer lugar, la convicción de la conducción revolucionaria, basada en una evidencia sólida, de que es posible esperar más de los sacrificios de los trabajadores que del patriotismo de los empresarios. En otras palabras, que la clase obrera, por su adhesión a la revolución, es un sector que puede postergar la consecución de algunas reivindicaciones en aras del beneficio del conjunto del proyecto revolucionario, fuera del cual ninguna reivindicación sería posible. El argumento es una variante del que plantea la necesidad del sacrificio de la generación presente para beneficio de las generaciones futuras, se apoya en la suposición —cuestionable en el caso de Nicaragua— de que el margen de alternativas de los asalariados es menor, y se correspondió con un enfoque equivalente aplicado en materia de precios a los productores agrícolas.¹⁹ El argumento se correspondía también con el interés de la conducción revolucionaria, muy fuerte en los años iniciales, de constituir un APP sólido, como eje dinámico de lo que entonces se llamaba la nueva

¹⁹ Hasta muy recientemente, en efecto, la política de precios agrícolas fue mucho más beneficiosa para los productores de agroexportación que para los productores de granos básicos, y dentro de la agroexportación, más beneficiosa para los productores de algodón y caña de azúcar que para los productores de café. En términos sociales, fue más beneficiosa para los productores capitalistas y grandes y medianos, y para el sector estatal, que para los campesinos productores de café y granos básicos. Es decir, una política que en general trató mejor a los productores con mayor capacidad de presión sobre el gobierno, o con alternativas más favorables.

economía sandinista. Se entendía que reivindicaciones salariales amplias conspiraban contra el objetivo de dotar de un mínimo de rentabilidad a las empresas a partir de las cuales habría de configurarse el APP. El ejemplo de Chile durante la experiencia de la Unidad Popular se traía generalmente a colación como argumento adicional en favor de una política cautelosa en materia de salarios.

En segundo lugar incidió en esto una cierta confusión respecto del papel de los salarios en la etapa presente de la revolución y, más en general, sobre la naturaleza del proceso de trabajo. En algunos sectores del FSLN se asumió como cuestión de principios que el triunfo de la Revolución Sandinista y la conquista del poder político por un bloque de fuerzas nacional-popular despojaban a las relaciones laborales de su contenido de explotación. En algunos casos se intentó una diferenciación entre las relaciones laborales dentro del APP, que se suponían de nuevo tipo, y las relaciones laborales en la economía privada, pero en general prevaleció una visión que afirmaba, explícita o implícitamente, la transformación política del contenido socioeconómico de las relaciones de trabajo. En algunos casos esta concepción está ligada a la situación planteada por la guerra contrarrevolucionaria impulsada por el gobierno de Estados Unidos: la prioridad asignada a la defensa y a la unidad nacional transformaría el carácter de la relación laboral.²⁰

En tercer lugar, es posible que estemos en presencia de la pervivencia de una conceptualización precapitalista del trabajo asalariado, que ve en el obrero una fuente de gastos más que una fuente de plusvalor. Esta concepción se encuentra más generalizada de lo que muchas veces uno podría pensar,²¹ y se articula con el carácter importador neto del sector industrial. En una situación de crisis económica, con agudas restricciones externas, la legitimidad de un aumento de salarios es cuestionada por el costo que impone al conjunto de la sociedad (cf. Tirado López 1985:132). Resulta más fácil decretar aumentos de precios a los productores —que se supone revertirán de

20 Cf. por ejemplo el siguiente pasaje de un editorial del diario *Barricada*, órgano oficial del FSLN: “Si antiguamente un mayor esfuerzo en la producción significaba enriquecer más a un patrón, en las nuevas relaciones sociales de producción que Nicaragua está creando, cada plus-esfuerzo es un aporte a la liberación de la sociedad de las presiones externas. Allí está la diferencia sustancial. Si bajo la dictadura el hombre era una mercancía que vendía su fuerza de trabajo para no morir, hoy el trabajador produce para aportar a una vida común, cumpliendo con un deber social. Ya no está produciendo solamente para satisfacer sus necesidades de alimentación y reproducción, hoy está logrando para sí mismo una nueva magnitud de sí mismo, a través de lo que crea con su trabajo” (1 de febrero de 1005).

21 Por ejemplo, durante una investigación sobre el impacto de la reforma agraria en el empleo rural, el autor encontró en varios dirigentes de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) —lo organización de los pequeños y medianos productores del campo— de los departamentos de León y Chinandega, una opinión adversa a los obreros rurales: no saben trabajar, son perezosos, despilfarran recursos, no cuidan el equipo.

manera directa en incremento de la producción—, que aumentos de salarios para quienes son vistos más bien como consumidores netos.

Por su lado, la estrategia multclasista de unidad nacional y economía mixta condiciona adicionalmente la capacidad reivindicativa de la clase obrera. Con la agudización de la crisis económica y la autonomización de la esfera de la circulación, el FSLN enfatiza la unidad nacional no sólo como unidad frente a la agresión militar del gobierno de Estados Unidos, sino como unidad de las clases productoras frente a las clases parasitarias. Es posible que esto tenga que ver con el socialismo de Saint Simon más que con el socialismo de Marx, pero si las concepciones sociales son en definitiva una resultante del ser social, es evidente que el modo de ser del capitalismo dependiente que se desarrolló en Nicaragua, más extendido en la esfera de la circulación que en la de la producción, tiene aún mucho que ver con Saint Simon, e incluso con Ricardo.

En estas circunstancias el tipo de alianza que se estructura entre la clase obrera y el campesinado es distinto del que figura en los textos convencionales, o del que se desarrolló en otras revoluciones sociales. En primer lugar, porque en la medida en que una proporción alta de la clase obrera es clase obrera rural, la alianza adquiere una fisonomía rural- rural por contraste con la fisonomía urbano-rural de la alianza tradicional. En segundo lugar, porque como resultado de las presiones que la guerra y la crisis ejercen sobre los trabajadores urbanos, y de la consiguiente reorientación de la estrategia económica, no son los campesinos quienes subsidian a los trabajadores de la ciudad sino, ahora, los trabajadores de la ciudad los que subsidian a los campesinos y, en general, a los trabajadores del campo.²²

Sin embargo es necesario agregar que esta situación tiene lugar en el marco de un esquema multclasista en el cual el conjunto de trabajadores y campesinos debe subsidiar, a través de los mecanismos de política económica y financiera, a la burguesía patriótica y a las capas medias urbanas. El deterioro de las condiciones de vida de estos grupos es notorio; ello ha podido apreciarse al analizar la abrupta caída del consumo no básico y se ve confirmado por las observaciones cotidianas. Si a las condiciones económicas adversas se suma la guerra, que recluta a sus hijos en el servicio militar a menos que los contrabandeen fuera del país, parece claro que la situación presente dista mucho de ser, para estas fracciones, el mundo ideal. No obstante, se trata

22 Cf. la fundamentación de esta estrategia en el discurso del miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Comandante de la Revolución Luis Camón, en la inauguración del Primer Congreso Campesino. *Barricada*, 26 de abril de 1986.

de un proceso desigual de deterioro, donde el punto de partida de los trabajadores es, obviamente, mucho más bajo, y su vulnerabilidad mayor.

Esta situación de enfrentamiento desigual a la crisis y de pujas internas por la distribución de sus efectos, no carece de cierta lógica cuando se observa el proceso revolucionario en toda su complejidad social. Las capas medias, la pequeña burguesía, constituyen una proporción relativamente grande de la sociedad nicaragüense, sobre todo en las áreas urbanas, y contribuyeron al derrocamiento de la dictadura. Están representadas en el gobierno revolucionario, y forman parte del FSLN; del mismo modo que otros segmentos de esas mismas capas se identifican con la oposición e incluso con la contrarrevolución. No debe extrañar entonces que presionen en favor de políticas que respondan o se adapten a sus propios intereses, y que esos intereses puedan ser identificados en muchas de las políticas y enfoques del régimen revolucionario. Y, complementariamente, es coherente con la estrategia revolucionaria global la preocupación del régimen revolucionario por dar algún tipo de respuesta a las demandas de estos sectores.²³

Las condiciones actuales son poco propicias para pensar en un cambio radical en las condiciones de vida de la clase obrera, y en general de las clases populares, o en su capacidad de determinación de las políticas del Estado. Es necesario reconocer sin embargo que a pesar de sus múltiples limitaciones, de los resultados no siempre alentadores y de muchos elementos contradictorios, el FSLN y el gobierno han tratado de evitar que el impacto de la crisis y de la guerra gravite más de la cuenta sobre los trabajadores.²⁴

En esto, sin embargo, el FSLN ha sido más receptivo a las demandas obreras que el Estado. La tendencia de las instituciones del Estado ha sido respaldar a los administradores de las empresas del APP cada vez que se suscita un conflicto entre éstas y el sindicato, incluso cuando el sindicato reclama por el mal desempeño de la administración respecto de los intereses de la

23 No tener en cuenta esta cuestión ha llevado a que la interpretación de las revoluciones sociales en este tipo de sociedades incurra a veces en una abierta contradicción lógica. Por un lado, se reconoce que el tipo de capitalismo dominante, y su articulación con formas precapitalistas de producción, genera una estructura social compleja en la cual el proletariado constituye una proporción minoritaria, e incluso muy reducida, de la población total. Por el otro lado, se lanzan críticas acerbas contra estos mismos regímenes revolucionarios por impulsar estrategias y políticas que se caracterizan como pequeñoburguesas. Cf. por ejemplo Astrow 1983.

24 Esto pudo apreciarse, por ejemplo, con motivo de la adopción de un programa de ajuste en febrero de 1985. Se trató de compensar el impacto de la eliminación de los subsidios con alzas de salarios, y se Impuso un tratamiento gradual a lo que normalmente es un programa de shock. Al final, las leyes objetivas de la economía se impusieron: se diluyó el efecto de ajuste, pero no se pudo demorar por más de un par de meses la abrupta caída de los salarios reales.

empresa. La mayor preocupación del Estado parece ser la consolidación del principio de autoridad frente a lo que se considera indisciplina obrera. Se responde con lentitud a las demandas sindicales, los procedimientos se desenvuelven con parsimonia, hasta que el sindicato, la ATC o la CST apelan directamente a la Dirección Nacional del FSLN y las cosas empiezan a resolverse.

Aunque la distinción parezca sutil, las condiciones de vida y de trabajo de los obreros se han degradado más en tanto que obreros que en tanto que pueblo. El consumo individual se ha deteriorado más que el consumo colectivo, y éste no requiere contraprestación laboral. El empleo y los ingresos asalariados se han reducido más que el empleo en las actividades informales y que los ingresos no asalariados. En una sociedad como la nicaragüense, la crisis económica implica, más que la transferencia de fuerza de trabajo del empleo al desempleo, el aumento del tiempo de trabajo que se invierte en actividades informales y una mayor participación de los ingresos derivados de estas actividades en el ingreso conjunto de la familia del trabajador. Ciertamente las cosas son más difíciles que hace dos o tres años, pero de todos modos el sector informal sigue pareciéndose bastante a un gran lago donde todo el mundo puede pescar.

Seguramente éste no es el panorama que los revolucionarios tenían en mente en el momento del triunfo. Pero es necesario preguntarse si acaso es posible mucho más, o algo fundamentalmente diferente, en una revolución antioligárquica y de liberación nacional que no plantea como cuestión de principio liquidar el capitalismo sino sus formas más injustas, atrasadas y dependientes; con una crisis económica donde los factores que emanan de los desajustes provocados por las transformaciones internas se articulan con los que derivan de la crisis regional; en un país atrasado, empobrecido y agredido que, con más coraje e imaginación que recursos, debe hacer frente a la mayor potencia militar de la historia.

Más que para cualquier otra clase o sector de la sociedad, para los trabajadores; los pobres, la gente del pueblo, la Revolución Sandinista sigue siendo, ante todo, una conquista política. Ya no existe la Guardia Nacional. La actividad sindical no es reprimida o clandestina. Se puede discutir con el patrón o con el administrador sin miedo a ser despedido. Se puede ocupar un terreno vacío y levantar una casita sin que venga la policía a romper todo y echarlo a uno a patadas. Hay tierra para los campesinos. Los niños van a la escuela.

Managua, septiembre de 1986

REFERENCIAS

ASTROW, A.

1983 *Zimbabwe: A Revolution that lost its Way?*, Zed Books, Londres.

BAUMEISTER, E.

1985 "The Structure of Nicaraguan Agriculture and the Sandinista Agrarian Refom", In R. Harris & C.M. Vilas (comps.), *Nicaragua: A Revolution under Siege* Zed Books, Londres, 10:35.

CASTILLO, M. et al.

1985 *Estudio sobre la productividad en la fábrica INCA*, Universidad Centroamericana, Escuela de Sociología, Mimeo, Managua.

CIERA, Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria

1983 *Distribución y consumo popular de alimentos en Managua*. CIERA, Managua.

CORONEL, R.

1984 "Una estrategia para superar la dependencia y el subdesarrollo", *Revolución y Desarrollo*, n. 2 (julio-septiembre), 9:15.

CRQUILLON, A. et al.

1985 *Revolución y mujeres del campo*, Asociación de Trabajadores del Campo, Managua.

DUKSTRA, G.

1985 *La industria en la economía mixta de Nicaragua*, mimeo, Managua.

DEERE, C.D. y P. MARCHETTI

1981 "The Worker-Peasant Alliance in the First Year of the Nicaraguan Agrarian Reform", *Latin American Perspectives*, n. 29 (Spring) 40:73.

FLORA, J. et al.

1983 "The growth of class struggle: The impact of the Nicaraguan Literacy Crusade in the political consciousness of young literacy workers", *Latin American Perspectives*, n. 36 (Winter) 45 :61.

INEC, Instituto Nicaragüense de' Estadísticas y Censos

1981 *Anuario estadístico de Nicaragua*, INEC, Managua.

1984 *Anuario estadístico de Nicaragua*, INEC, Managua.

INSSBI, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar

1985 *48 meses de agresión extranjera*, INSSBI, Managua.

LENIN, V.I.

1974 *Contenido económico del Populismo Siglo XXI* Madrid.

MINTZ, S.

1974 "The rural proletariat and the problem of the rural proletarian consciousness", *Journal of Peasant Studies*, 1 (3) 291:325.

RIPP, J.L. et al.

1984 "Revolution and Health Care in Nicaragua". *Medical Anthropology Quarterly* 15 (3) 68:74.

RUIZ, H.

1980 "La montaña era como un inmenso crisol donde se forjaban los mejores cuadros", *Nicaragua*, n. 1 (mayo-junio) 8:24.

STAHLER-SHOLK, R.

1985 *Política salarial en Nicaragua, 1979-1985*, Managua, sin publicar.

1986 *La normación del trabajo en Nicaragua, 1983.1986*, Managua, sin publicar.

TIRADO LÓPEZ, V.

1985 *La primera gran conquista: La toma del poder político*. Ediciones de la CST, Managua.

UNICEF-OPS

1984 *Análisis de la situación económico-social de Nicaragua*, UNICEF, Managua.

VILAS, C.M.

1983 "Entre la producción de lo nuevo y la reproducción de lo viejo". *Nueva Antropología*, n. 21 (junio) 41:61.

1984 "Reforma agraria, agroexportación y empleo rural en Nicaragua". *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, IX (18) 111:132.

1985 "The Workers' Movement in the Sandinista Revolution", In R. Harris & C.M. Vilas, *Nicaragua: A Revolution under Siege*. Zed Books, Londres, 120:150.

1986a *The Sandinista Revolution. National Liberation and Social Transformation in Central America*, Monthly Review Press, N. York.

1986b "Nicaragua: The Fifth year -transformations and tensions in the economy", *Capital &*

Class, 28 (Spring) 105:138.